



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA



TESIS

**La autonomía del proceso de extinción de dominio frente al control de los
principios generales del derecho**

Autora:

Bach. Saenz Alvarado María Isabel

Asesora:

Mag. Colina Moreno Mary Isabel

Para optar el título profesional de Abogada

Fecha de sustentación:

16 de mayo del 2023

Lambayeque, 2023

Tesis titulada: “La autonomía del proceso de extinción de dominio frente al control de los principios generales del derecho”, presentada para obtener el título profesional de Abogada por:



Bach. Saenz Alvarado María Isabel
Autora



Mag. Colina Moreno Mary Isabel
Asesora

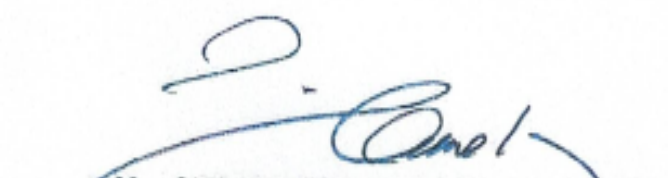
Aprobada por:



Abog. CARLOS MANUEL MARTINEZ OBLITAS
Presidente del Jurado



Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ
Secretario del Jurado



Mag. CARLOS MANUEL ANTENOR CEVALLOS DE
BARRENECHEA
Vocal del jurado

Dedicatoria

Dedico la presente tesis a Dios, mis padres, hermanos y mis tías, quienes estuvieron para conmigo en todos los aspectos de mi vida a lo largo de estos 26 años, a ellos les dedico este triunfo por motivarme día a día a ser una mejor persona y profesional.

Agradecimiento

A Dios, por su infinito amor al haberme otorgado una familia que ha creído en mí siempre y por haberme dado la fortaleza para llegar a este momento.

A mis padres Elga y Luis por su dedicación, sacrificio y esfuerzo al darme una carrera profesional, creer en mi capacidad y llenarme de fortaleza durante todo este tiempo.

A mis hermanos Alexandra y Luis Jesús por ser mi fuente de motivación e inspiración y así ser un ejemplo para ellos.

A mi mejor amiga Diana por haber estado siempre en los momentos más importantes de mi vida personal y profesional y apoyarme para que siempre sea perseverante y cumpla con mis ideales.

A la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo que me albergó durante 06 años y otorgarme el gran honor de haber estado en sus aulas.

A mi Asesora de tesis, por el apoyo y disponibilidad mostrada durante toda esta etapa de elaboración, sin su confianza depositada en mí, nada de esto hubiera sido posible.

Gracias a todos.



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA
UNIDAD DE INVESTIGACION



ACTA DE SUSTENTACIÓN
A C T A DE SUSTENTACIÓN VIRTUAL N° 23-2023-UI-FDCP

Sustentación para optar el Título de ABOGADA de: **Maria Isabel Saenz Alvarado.**

Siendo las 11:00 a.m. del día martes 16 de mayo del 2023 se reunieron vía Plataforma Virtual MEET de Google Suite de la Unidad de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo", los miembros del jurado evaluador de la tesis titulada: "**LA AUTONOMÍA DEL PROCESO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO FRENTE AL CONTROL DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO**", designados por Decreto N° 247-2021-FDCP- VIRTUAL de fecha 05 de noviembre del 2021, con la finalidad Evaluar y Calificar la sustentación de la tesis antes mencionada, por parte de los Señores Catedráticos:

PRESIDENTE : Abog. CARLOS MANUEL MARTINEZ OBLITAS.

SECRETARIO : Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ.

VOCAL : Mag. CARLOS MANUEL ANTENOR CEVALLOS DE BARRENECHEA

La tesis fue asesorada por Mag. MARY ISABEL COLINA MORENO, nombrada por Resolución N°247-2021-FDCP- VIRTUAL de fecha 05 de noviembre del 2021.

El acto de sustentación fue autorizado por Resolución N°173-2023-FDCP-VIRTUAL de fecha 04 de mayo del 2023.

La tesis fue presentada y sustentada por la bachiller **Maria Isabel Saenz Alvarado** y tuvo una duración de 30 minutos. Después de la sustentación y absueltas las preguntas y observaciones de los miembros del jurado; se procedió a la calificación respectiva, obteniendo el siguiente resultado: **APROBADA con la nota de 17 (DIECISIETE) en la escala vigesimal, mención de BUENO.**

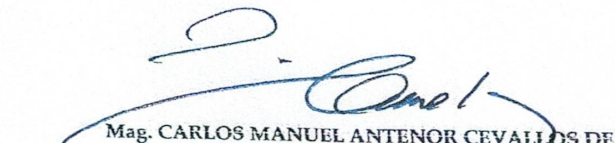
Por lo que queda APTA para obtener el Título Profesional de **ABOGADA**, de acuerdo con la Ley Universitaria 30220 y la normatividad vigente de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, y la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Siendo las 11:59 a.m., del mismo día, se da por concluido el acto académico suscribiendo los miembros del jurado el Acta; quedando registrado el video en el link: https://drive.google.com/file/d/1mZzfqn7HEDxWR3tcgHFfSW_lHBVv_fmtk/view?usp=share_link

Lambayeque, martes 16 de mayo del 2023


Abog. CARLOS MANUEL MARTINEZ OBLITAS
Presidente del Jurado


Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ
Secretario del Jurado


Mag. CARLOS MANUEL ANTENOR CEVALLOS DE
BARRENECHEA
Vocal del jurado

Certificación: El Director de la Unidad de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, certifica la veracidad del contenido del Acta de sustentación de tesis Virtual N° 23-2023-UI-FDCP correspondiente a Maria Isabel Saenz Alvarado, evento que se ha realizado de manera virtual el día martes 16 de mayo del 2023 y aparece registrada en el archivo correspondiente.

Lambayeque, 16 de agosto del 2023

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA

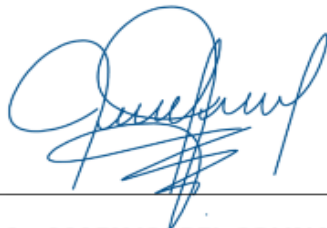

Dr. Rafael Hernández Canelo
Director De La Unidad De Investigación

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD DE TESIS

Yo, Mag. MARY ISABEL COLINA MORENO, Docente/ Asesor de tesis/ Revisor del trabajo de investigación de la bachiller en DERECHO Maria Isabel Saenz Alvarado, Titulada LA AUTONOMÍA DEL PROCESO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO FRENTE AL CONTROL DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO, luego de la revisión exhaustiva del documento constato que la misma tiene un índice de similitud de 16% verificable en el reporte de similitud del programa Turnitin.

El suscrito analizó dicho reporte y concluyó que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Lambayeque, 24 de febrero del 2023



Mg. MARY ISABEL COLINA MORENO
D.N.I 40997649
ASESORA



Bach. Maria Isabel Saenz Alvarado

DNI: 72718411

Autor

“La autonomía del proceso de extinción de dominio frente al control de los principios generales del derecho”

INFORME DE ORIGINALIDAD

16%

INDICE DE SIMILITUD

16%

FUENTES DE INTERNET

2%

PUBLICACIONES

6%

TRABAJOS DEL
ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1

repositorio.unprg.edu.pe

Fuente de Internet

3%

2

hdl.handle.net

Fuente de Internet

2%

3

docs.google.com

Fuente de Internet

2%

4

cdn.www.gob.pe

Fuente de Internet

1%

5

ri.ues.edu.sv

Fuente de Internet

1%

6

www.pj.gob.pe

Fuente de Internet

1%

7

extinciondedominio.org

Fuente de Internet

1%

8

www.buenosaires.gob.ar

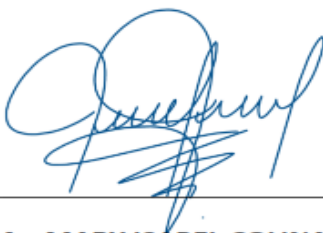
Fuente de Internet

< 1%

9

repositorio.unp.edu.pe

Fuente de Internet



Mg. MARY ISABEL COLINA MORENO

D.N.I 40997649

ASESORA

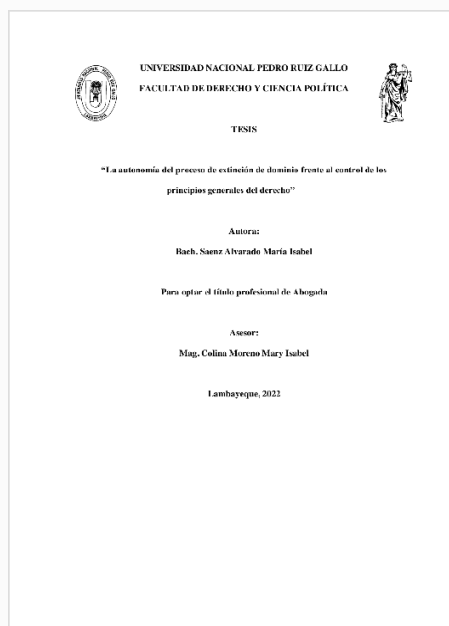


Recibo digital

Este recibo confirma que su trabajo ha sido recibido por **Turnitin**. A continuación podrá ver la información del recibo con respecto a su entrega.

La primera página de tus entregas se muestra abajo.

Autor de la entrega: María Isabel Saenz Alvarado
Título del ejercicio: TESIS
Título de la entrega: "La autonomía del proceso de extinción de dominio frente al...
Nombre del archivo: TESIS_SAENZ_ALVARADO_MARIA_ISABEL_MODIFICADO.docx
Tamaño del archivo: 388.73K
Total páginas: 99
Total de palabras: 19,817
Total de caracteres: 104,128
Fecha de entrega: 24-feb.-2023 09:43a. m. (UTC-0500)
Identificador de la entre... 2022038826



Derechos de autor 2023 Turnitin. Todos los derechos reservados.

Mg. MARY ISABEL COLINA MORENO
D.N.I 40997649
ASESORA

Índice

Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Índice	v
Índice de tablas	ix
Índice de ilustraciones	x
Resumen	xi
Abstract	xii
Introducción	13
Capítulo I.....	18
La metodología aplicada en el estudio	18
1.1. El planteamiento del problema.....	18
1.2. La formulación del problema	19
1.3. La justificación de la investigación	19
1.4. La importancia de la investigación.....	20
1.5. Los objetivos de la investigación	21
1.5.1. El objetivo general.....	21
1.5.2. Los objetivos específicos.....	21
1.6. La hipótesis de la investigación.....	21
1.7. Las variables de la investigación.....	21

1.7.1. Sobre la variable independiente.....	21
1.7.2. Sobre la variable dependiente.....	22
1.8. Los métodos aplicados en la investigación	22
1.8.1 El método exegético jurídico.....	22
1.8.2. El método sistemático jurídico	23
Capítulo II	24
La autonomía del proceso de extinción de domino.....	24
2.1. Trabajos previos a la investigación	25
2.2. Definición de extinción de domino	29
2.3. La propiedad como derecho fundamental	33
2.4. El proceso de extinción o pérdida de dominio	40
2.5. Críticas a la eficacia del proceso de extinción de dominio	41
Capítulo III	44
Los principios generales del derecho y su control sobre el proceso de extinción de dominio.....	44
3.1. Definición de principios	44
3.2. Los principios generales del derecho y su función de control	46
3.3. Efectos de los principios generales del derecho sobre los procesos judiciales	47
3.4. La aplicación de principios en el desarrollo del proceso de extinción de dominio.....	49
Capítulo IV	53

El análisis de los resultados.....	53
4.1. Resultado de la evaluación de expedientes judiciales sobre extinción de dominio.....	53
4.2. Resultado de la encuesta aplicada a los expertos en derecho.....	55
Capítulo V	73
La contrastación de la hipótesis	73
5.1. La discusión de los resultados	73
5.1.1. Discusión sobre el objetivo: “Identificar el fundamento jurídico justificante de la autonomía del proceso de extinción de dominio”.....	73
5.1.2. Discusión sobre el objetivo específico: Reconocer la participación de los principios generales del derecho en la ejecución del proceso de extinción de dominio.....	81
5.1.3. Discusión sobre el objetivo específico: Proponer la adecuación de la Ley del proceso de extinción de dominio para establecer un control adecuado en base a los principios generales del derecho.....	84
5.2. La validación de las variables	87
5.2.1. Validación sobre la variable independiente: La autonomía del proceso de extinción de dominio.....	87
5.2.2. Validación sobre la variable dependiente: Los principios generales del derecho	88
Los principios generales del derecho y en especial el debido proceso, así como el derecho de propiedad son alterados, por lo que debe establecerse la conexión entre la determinación de ilicitud del origen de los bienes	

sometidos a extinción de dominio a fin de garantizar el respecto del derecho de propiedad.	89
5.3. La contrastación de la hipótesis	90
Conclusiones:	91
Recomendaciones	93
Bibliografía.....	94
Anexos.....	97
1. Formulario de encuesta aplicada para la validación de expertos	97

Índice de tablas

Tabla 1: “Tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos del distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 1”55

Tabla 2: “Tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos del distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 2”58

Tabla 3: “Tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos del distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 3”61

Tabla 4: “Tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos del distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 4”64

Tabla 5: “Tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos del distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 5”67

Tabla 6: “Tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos del distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 6”70

Índice de ilustraciones

Ilustración 1: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos del distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 1” 56

Ilustración 2: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos del distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 2” 59

Ilustración 3: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos del distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 3” 62

Ilustración 4: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos del distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 4” 65

Ilustración 5: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos del distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 5” 68

Ilustración 6: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos del distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 6” 71

Resumen

La verificación de condiciones particulares en el desarrollo del proceso de extinción de dominio, llama la atención en virtud de la consecución de su objeto y el vínculo que guarda con el proceso penal, ello en tanto que el origen resulta ser el mismo, esto es la noticia criminal, que a tales instancias resulta ser una presunción, dado que atendiendo al principio de presunción de inocencia no es posible atribuir responsabilidad penal al agente investigado hasta no tener un acto resolutivo firme. Es sólo en esta fase en la que se puede vincular válida y legítimamente el patrimonio con el carácter ilícito de su origen.

Es por ello que este trabajo académico se enfoca en la observación de dichas condiciones jurídicas, para lo cual se ha utilizado el método de la observación, el método documental para recopilar las fuentes teóricas que respaldan la posición crítica sobre el sentido autónomo que adopta el proceso de extinción de dominio a través de su regulación. De igual modo jurídicamente se aplicaron los métodos exegético y sistemático, para evaluar el sentido normativo que circunda a este tipo de proceso judicial.

En tal sentido los resultados han permitido corroborar la alteración de los principios generales del derecho contenidos en el debido proceso, dado el carácter autónomo que desvincula al proceso de extinción de dominio respecto del proceso penal. Siendo este último el encargado de la determinación de la responsabilidad penal del agente y por ende del carácter ilícito del patrimonio que ostenta; será el único medio que permita reconocer el origen ilícito de dichos bienes que justifique el traslado de la propiedad a nombre del Estado.

Palabras claves: Autonomía, Extinción de dominio, principios generales del derecho

Abstract

The verification of particular conditions in the development of the domain forfeiture process, draws attention by virtue of the achievement of its object and the link it maintains with the criminal process, while the origin turns out to be the same, that is, the criminal news, which in such instances turns out to be a presumption, since in accordance with the principle of presumption of innocence it is not possible to attribute criminal responsibility to the investigated agent until there is a firm resolving act. It is only at this stage that the patrimony can be validly and legitimately linked to the illicit nature of its origin.

That is why this academic work focuses on the observation of these legal conditions, for which the observation method has been used, the documentary method to compile the theoretical sources that support the critical position on the autonomous sense that the process adopts. domain forfeiture through its regulation. In the same legal way, the exegetical and systematic methods were applied to evaluate the normative sense that surrounds this type of judicial process.

In this sense, the results have allowed us to corroborate the alteration of the general principles of law contained in due process, given the autonomous nature that separates the asset forfeiture process from the criminal process. Being the latter the one in charge of determining the criminal responsibility of the agent and therefore the illegal nature of the patrimony that he holds; It will be the only means that allows recognizing the illegal origin of said assets that justifies the transfer of the property in the name of the State.

Keywords: Autonomy, extinction of domain, general principles of law

Introducción

La tesis que se presenta a continuación lleva por título “La autonomía del proceso de extinción de dominio frente al control de los principios generales del derecho”, el mismo que surge de la identificación de un problema jurídico respecto a la legitimidad con la que se atiende el desarrollo de dicho proceso judicial. Interesa por ello establecer si tal acción procesal se vincula correctamente con el sentido normativo de los principios generales, interesando de manera precisa la condición del debido proceso y el sentido de garantía respecto a la propiedad como derecho.

Para tales efectos se ha considerado un espacio de observación en el Distrito Judicial de Lambayeque, para reconocer el sentido de justificación que impulsa el origen de estos procesos especiales, que como es el caso corresponde en coincidencia directa con el que inspira el proceso penal. Bajo dicha delimitación espacial se ha considerado una muestra de 13 expedientes donde se verifica esta condición que no describe el carácter ilícito del bien, con la autoridad que le corresponde al ámbito penal, en función de la atribución de dicha responsabilidad.

Lo señalado, muestra una condición de incongruencia entre el objeto del proceso de extinción de dominio, ello en tanto que se funda bajo el carácter ilícito del origen patrimonial, el mismo que no ha sido demostrado en el ámbito que corresponde, como bien ya se dijo, en la investigación penal. Bajo esta perspectiva es que se ha considerado cuestionar ¿Cuál es efecto de la autonomía del proceso de extinción de dominio sobre el control de los principios generales del derecho?

El sentido de esta interrogante está diseñado con la intención de observar si estos principios normativos, cumplen la función de control de manera eficaz, lo cual se verifica de una manera incompleta, dado que es la propia construcción que legislativamente se ha realizado para describir la extinción de dominio como un proceso, lo cual no permite establecer el vínculo de legitimidad con el proceso penal que será el que determine la responsabilidad y por ende el carácter de ilicitud del bien. En virtud de ello se ha establecido como hipótesis inicial: La aplicación de la autonomía del proceso de extinción de dominio tiene un efecto limitante sobre el control de los principios generales del derecho; por lo cual, debe adecuarse su estructura legislativa.

Tal cual se ha indicado, el desarrollo de este análisis incorpora la observación de la realidad jurisdiccional, lo cual además debe estar reforzado con la fundamentación de la doctrina jurídica, que permita afianzar el sentido de la propuesta, por lo mismo que se han generado las metas de la investigación, que se muestra a nivel general indicando: Determinar el efecto que produce la autonomía del proceso de extinción de dominio sobre el control de los principios generales del derecho.

Del mismo modo se ha considerado a nivel específico, aquella determinación de tareas académicas para la ejecución de este trabajo, que son: -Identificar el fundamento jurídico justificante de la autonomía del proceso de extinción de dominio. - Reconocer la participación de los principios generales del derecho en la ejecución del proceso de extinción de dominio. - Proponer la adecuación de la Ley

del proceso de extinción de dominio para establecer un control adecuado en base a los principios generales del derecho.

Cabe indicar que las metas propuestas como tarea principal de esta investigación se estructuran en razón de la necesidad de reconocer el verdadero sentido argumentativo que posee este tipo de proceso, vale decir que las funciones que desarrolla en su ejecución deben ser vistas desde el plano de la necesidad social. Las condiciones en las que se instituye la necesidad deben coincidir con los intereses directos de la sociedad, esto es los intereses comunes, para el caso estudiado, el interés común está orientado sobre la seguridad ciudadana, pero que termina en contraposición con la seguridad jurídica que se supone el propio Estado estructura como base del ordenamiento y de la sociedad, sobre todo en el caso que se analiza que respecta a la propiedad y sus efectos.

De acuerdo al diseño planteado en el capítulo primero respecto a la metodología aplicada, a partir del capítulo segundo, se incorpora el desarrollo descriptivo del carácter autónomo del proceso de extinción de dominio en el ámbito del desarrollo académicos que se alcanzó a observar y en función a ello se ha obtenido una característica común que no admite como válido el carácter autónomo de este proceso. Además de ello se ha tenido en cuenta el desarrollo teórico de la propiedad como derecho directamente afectado por este tipo de proceso judicial para comprender su alcance y la manera en que puede ser limitado de acuerdo a condiciones especiales de verificación judicial.

Es en virtud a dicha evaluación tanto teórica como dogmática del proceso de extinción de dominio que se alcanza a verificar que su objeto jurídico no alcanza una concreción total, debido a que los efectos de lucha contra la criminalidad, no resulta de un aporte satisfactorio, puesto que los bienes no son destinado de manera adecuada, siendo esto último una condición más administrativa que procesal. Siendo la crítica más importante sobre este proceso, la condición autónoma respecto al proceso penal, del mismo que se ha reconocido un valor trascendental en razón de la determinación de las razones que permitan reconocer el sentido de responsabilidad que se le puede atribuir como responsabilidad a un determinado sujeto, siendo por consecuencia el reconocimiento del carácter ilícito de el elementos patrimonial de los agentes.

Para la construcción del capítulo segundo se ha tenido en cuenta la segunda meta de la investigación, que tiene por principal finalidad establecer un criterio para alcanzar una revisión idónea en función a las reglas de optimización de carácter general, atendiendo a su condición normativa para ejercer control sobre la ejecución del derecho, en tanto existan dudas sobre su ejercicio o aspectos no claros en el desarrollo de los procesos. Para este caso de la investigación, se observa que en efecto existe esta última condición, puesto que la separación del proceso penal convierte en poco clara la determinación de ilicitud, en tanto que solo se origina en una presunción de la acción delictiva.

En base toda la información obtenida, se ha logrado corroborar la situación jurisdiccional de los procesos de extinción de dominio mostrado en la fase análisis y resultados, así como la verificación del apoyo brindado respecto a las posturas que

se han planteado en esta labor académica en particular, que se inclina mayoritariamente hacia las posturas planteadas en esta investigación, lo que permite advertir un sentido de viabilidad de la propuesta, lo cual se observa en el capítulo cuarto de la investigación.

Por último en el capítulo quinto, se plasma la contrastación de la hipótesis, la misma que se origina con el desarrollo del discurso crítico sobre el resultado de cada uno de los objetivos específicos, en virtud de lo cual se plasman las posturas pertinentes para luego derivarlas a manera de síntesis hacia el reconocimiento validado de variable por variable, resultado con el cual se permitió una determinación final que al tener el mismo origen de la hipótesis inicial, permite la contrastación, estableciendo un resultado corroborativo de dicho planteamiento.

Conforme a lo señalado por la guía metodológica, los resultados y las posturas han permitido crear la fase determinante de la investigación, así es como se han obtenido las conclusiones que corresponde de manera directa a cada uno de los objetivos tanto general como específicos; siendo que, como consecuencia se logró establecer un espacio de recomendación y sugerencia, como posible solución al problema cuya existencia se demuestra.

La autora.

Capítulo I

La metodología aplicada en el estudio

1.1. El planteamiento del problema

De acuerdo a la observación de la realidad que circunda al proceso de extinción de dominio, se ha podido verificar un cierto conflicto partiendo de la concepción teórico doctrinaria que se ha construido entorno al ámbito jurídico, el mismo que parte de la condición de autonomía del proceso, dado que no se aprecia como parte de un proceso penal ni mucho menos en lo que corresponde al Derecho Civil.

Tal situación trae como consecuencia directa la presencia de ciertas dudas respecto a la fundamentación jurídica que origina la condición de autonomía de dicho proceso que estaría alterando el correcto funcionamiento de la estructura jurídica, dado que se ejecuta en contra de los principales derechos fundamentales que son inspirados por los principios generales del derecho.

Esta alteración se concibe como un elemento trascendente para ser revisado en función al análisis doctrinario y dogmático que permita reconocer si la estructura que se ha creado para la restricción de los derechos que comprenden a la propiedad, están siendo vinculados de manera adecuada con la función de control que tienen por atribución los principios generales del derecho, que desde luego deberá contrastarse respecto al carácter funcional que le asiste a un proceso con características tan particulares como el que representa la extinción de dominio en su lugar.

Interesa esta evaluación dado que la forma en que se viene ejecutando el proceso de extinción de dominio al no contemplar límites como aquellos que imponen los principios generales del derecho, estarían afectando intereses colectivos que debieran ser contemplados en el ámbito de protección del proceso penal, esto es bajo las reglas del debido proceso que le corresponde.

1.2. La formulación del problema

¿Cuál es efecto de la autonomía del proceso de extinción de dominio sobre el control de los principios generales del derecho?

1.3. La justificación de la investigación

De acuerdo al planteamiento del problema que ubica a la aplicación de la extinción de dominio como un problema en tanto afecta la garantía que supone el control ejecutado por los principios del derecho, se puede entender como justificada esta investigación desde la perspectiva social, dado que se debe revisar el interés social que impulsa la acción jurídica para este tipo de casos, así pues el sentido de proteger debe ir vinculado a las necesidades de la población, entre las cuales se encuentra el requerimiento de seguridad para la realización de ciertos actos jurídicos como es el caso del ejercicio del derecho de propiedad.

Es posible hacer un reconocimiento puntual en el espacio de justificaciones una relacionada con el ámbito jurídico legislativo, mediante lo cual es posible

apreciar una estructura destinada para este proceso, que se ha concebido bajo una condición autónoma, pero que guarda fuertes vínculos con el aspecto penal, dado que su origen se contempla desde la aparición de la noticia criminal, de lo cual se parte para el análisis de la licitud de los bienes que intervienen en la investigación relacionadas con los agentes delictivos. Es importante que se revise este aspecto en tanto que el control de la actividad jurídica depende de la acción de la constitución que a través de sus principios optimiza la aplicación del derecho.

1.4. La importancia de la investigación

Es importante el desarrollo de esta labor académica, porque los resultados que se esperan alcanzar tendrán la posibilidad de servir de argumento para la proyección de una propuesta que señale al proceso bajo la condición jurídica adecuada, esto es que se vincule directamente con la ejecución del proceso penal, dado que su autonomía no opera de manera adecuada en función a que supera las condiciones que imponen los principios generales del derecho, sobre todo en lo que respecta a la propiedad.

Resulta de mucha importancia también la investigación dado que se puede establecer como beneficiarios de la sugerencia, a la propia sociedad, que será provista de mayor seguridad jurídica en la ejecución de estos procesos, puesto que primará el interés público, ello de forma general, entre tanto que de manera particular, se puede comprender como beneficiarios aquellos terceros de buena fe los mismos que son afectados en razón de aquella intervención que asume como Estado mediante tal proceso sobre los bienes patrimoniales.

1.5. Los objetivos de la investigación

1.5.1. El objetivo general

- Determinar el efecto que produce la autonomía del proceso de extinción de dominio sobre el control de los principios generales del derecho.

1.5.2. Los objetivos específicos

- Identificar el fundamento jurídico justificante de la autonomía del proceso de extinción de dominio.
- Reconocer la participación de los principios generales del derecho en la ejecución del proceso de extinción de dominio.
- Proponer la adecuación de la Ley del proceso de extinción de dominio para establecer un control adecuado en base a los principios generales del derecho.

1.6. La hipótesis de la investigación

La aplicación de la autonomía del proceso de extinción de dominio tiene un efecto limitante sobre el control de los principios generales del derecho; por lo cual, debe adecuarse su estructura legislativa.

1.7. Las variables de la investigación

1.7.1. Sobre la variable independiente

La autonomía del proceso de extinción de dominio.

1.7.2. Sobre la variable dependiente

Los principios generales del derecho.

1.8. Los métodos aplicados en la investigación

Tal cual se ha proyectado en el objetivo general de la tesis, se planteó el reconocimiento de un problema relacionado con la extinción de dominio como proceso judicial que se ha caracterizado por su autonomía, la misma que debe ser revisada con atención a fin de verificar si en efecto se ejecuta bajo ese parámetro, en tal sentido se ha considerado pertinente la intervención de los principios generales del derecho con la intención de lograr un adecuado control de la afectación de derechos fundamentales que pueden afectarse con la intervención del Estado a través de este proceso.

Para tal fin, se recurrió al apoyo de los métodos de la investigación, que en lo concerniente al Derecho deben ser orientados al apoyo de los razonamientos sobre las figuras e instituciones jurídicas que participan en esta investigación; por lo mismo se tuvo como apoyo a los métodos de interpretación jurídica, con lo cual se han podido observar elementos normativos para lograr la comprensión de los alcances de dichas reglas.

1.8.1 El método exegético jurídico

Como es sabido la intervención de las reglas en el destino jurídico de la sociedad resulta de vital importancia para lograr su equilibrio, así resulta importante la verificación de los contenidos normativos para lograr comprender su sentido de

una manera adecuada y establecer mediante la interpretación la forma más adecuada de su aplicación.

Para tal fin este método permitió la evaluación de las reglas que señalan la estructura de aplicación que rige el sendero de ejecución del proceso estudiado, el cual anteriormente ha sido considerado bajo la nominación pérdida que opera respecto al dominio y se constituyó como un elemento importante en la lucha contra el crimen organizado. En tal sentido la interpretación que se realizó partió del propio contenido de la regla, esto es del reconocimiento literal construido por el legislador, en principio para poder asumir el carácter de autonomía que se le irroga.

1.8.2. El método sistemático jurídico

Tomando como punto de partida el análisis interpretativo anterior respecto a las normas que se ocupan del proceso de extinción de dominio, realizado de una forma particular puesto que se ocupa de la norma en sí, en lo que respecta a este tipo de interpretaciones sobre la sistematización de las normas ha procedido a la evaluación de esta misma regla pero en su vinculación con las demás que contiene el ordenamiento jurídico a fin de reconocer su engranaje sistemático.

Lo señalado se ocupó de la revisión del vínculo normativo constitucional, esto es con la propia constitución en la que se plasman las garantías que corresponden a los derechos fundamentales, lo que implica el reconocimiento de los principios generales del derecho, o pautas sobre las que debe regirse todo el ordenamiento normativo. Precisamente con este tipo de control es que se puede lograr una aplicación adecuada del proceso de extinción de dominio para evitar la vulneración de derechos fundamentales como es el caso de la propiedad como derecho.

Capítulo II

La autonomía del proceso de extinción de domino

La condición de cada proceso judicial depende siempre de una estructura definida en función del esquema que proyecta el ordenamiento jurídico, esto es en razón de los ámbitos en los que se discuten los derechos vulnerados, es así como se atienden la protección de los mismos y se pretende satisfacer las necesidades de los miembros de una sociedad y de la sociedad misma en tanto organización. La contemplación de dicho orden implica que existe un vínculo entre las diferentes áreas que conviene mantener en razón de la congruencia jurídica que debe distinguir a la discusión de la situación de los derechos, que, para el caso de interés de esta investigación, corresponde a la propiedad.

Es por tal razón que se debe analizar el sentido jurídico que justifica la distinción del proceso en estudio, para ser comprendido como de carácter autónomo o si resulta tal determinación como excesiva o extralimitada, toda vez que siempre existirá una relación de dependencia, que para el caso específico de discusión el carácter ilícito se encuentra enlazado con el tema de la investigación penal que se entiende es el área donde se tendrá que determinar tal sentido.

Para los fines planteados, es importante que se tenga en consideración de primera línea a los trabajos que se han desarrollado de manera previa por la construcción de esta investigación, es así que se toman las tesis desarrolladas en torno

al tema de la intervención del Estado sobre el ejercicio de las facultades que otorga la propiedad, con el fin de ejecutar acciones en contra de la criminalidad organizada, atendiendo a una justificación vertida sobre el origen ilícito de los bienes materia de extinción en cuanto a los derechos de disposición de la cosa.

2.1. Trabajos previos a la investigación

Las condiciones en las que se ubica un tema académico en cuanto a su desarrollo y comprensión, resulta trascendente para poder dar inicio a una nueva tarea de análisis sobre el tema que en este caso se propone como lo es la condición de autonomía que configura un proceso que ataca el derecho a la propiedad bajo una justificante de necesidad. Esta necesidad debe ser observada según los niveles de análisis que se han detallado en las investigaciones desarrolladas de forma previa a la que ahora se proyecta, por lo mismo que resultará de mucha utilidad el reconocimiento de los alcances que se han logrado en función a dicho tema.

La intención de recopilar otras tesis sobre el particular, conviene sobre manera en tanto que permitió desarrollar un sentido más lógico respecto no solo a la necesidad que justifica el carácter de autonomía que distingue a la extinción de dominio, sino que también permitió establecer una ruta de análisis para vislumbrar los efectos que esta produciendo la ejecución de este tipo de procesos judiciales. Resulta interesante el hecho de poder concebir si la justificación de intervención del Estado para restringir la propiedad, realmente esta promoviendo un efecto de disminución de la criminalidad en el ámbito que ataca al patrimonio de las organizaciones criminales.

En virtud de lo señalado se da inicio a la toma de referencias sobre las investigaciones previas que en primer lugar conlleva a incorporar la investigación de Aroapaza Balcona, (2016) cuyo estudio ha sido titulado “*Naturaleza Jurídica de la Pérdida de Dominio en el Perú*” de cuya construcción determinante se ha recogido la siguiente conclusión:

“Es necesario la precisión de la naturaleza jurídica de la acción de pérdida de dominio. El tratamiento de accesoriedad de la pérdida de dominio debe tener mayor amplitud en el proceso penal, pudiéndose generar actos procesales específicos o extraordinarios para su tratamiento antes de la culminación del proceso penal, lo que evitaría la generación de un proceso sucesáneo como se encuentra muy directamente previsto”. (Aroapaza, 2016, p. 112)

Como se habrá podido notar en la conclusión arribada por la investigación considerada como antecedente, es importante tener en consideración el verdadero sentido del proceso, que tal se aprecia es un análisis anterior a la actual nominación puesto que la señala como pérdida de dominio. Según lo señalado sería posible alcanzar un ámbito de aplicación o efectos respecto a este proceso si se llegara considerar como una cuestión relacionada al proceso penal, esto es que llegue a tener el carácter de accesoriedad para un mejor entender de su sentido sancionador.

Lo señalado podría asumirse como una postura correcta en tanto que para poder subsistir una actividad que le es atribuida como función de Estado, como es el caso de la extinción de dominio que llegará a limitar o anular derechos de quienes sean procesados, se precisa de justificaciones y estas a su vez de un origen propio en

lo que corresponde al proceso. Este origen sin duda tendrá que ver con la responsabilidad penal que se atribuye en razón de un delito como son los que se aprecian en el crimen organizado.

Dicha justificación sería la razón que nutra el sentido de este proceso o mejor dicho de su propia naturaleza jurídica, ya justificada la intervención limitante o restrictiva de derechos por parte del Estado, no habrá mayor problema en cuanto a la verificación del sentido de justicia en su aplicación. Es por ello que se encuentra apropiada la vinculación de este control con aquellas reglas de optimización del derecho, pues están contemplados como parte del esquema normativo constitucional y sirven precisamente para operar de manera adecuada el derecho en sí.

De igual modo, resulta necesario tener en cuenta el trabajo académico desarrollado por Neira (2017), el mismo que ha sido titulado como “*El Delito de Lavado de Activos y el Proceso de Pérdida de Dominio en la Legislación Penal Peruana*”, tesis que se ha reconocido como coincidente en la determinación que se plasma seguidamente:

“La prueba indiciaria sobre el origen ilícito de los activos que lleva a una sanción penal por la comisión del delito de lavado de activos facilita altamente incoar el Proceso por Pérdida de Dominio. De este modo se ha establecido mediante los datos recopilados que la imposibilidad de iniciar o continuar el proceso por delito de lavado de activos permite positivamente incoar el Proceso por Pérdida de Dominio”. (Neira, 2017, p. 192)

Según lo que se aprecia de la determinación en la tesis citada, existe un vínculo entre el ahora denominado proceso de extinción de dominio y el proceso penal, pues como se indicó anteriormente, el origen de la responsabilidad parte del proceso penal, que como señala para el caso de lavado de activos, tendría un elemento de discordia entre lo que representa el seguimiento del proceso penal y el atribuido al proceso judicial que se está analizando, en tanto este último puede bien iniciarse aun cuando el anterior no prospere.

Dicho esto, resulta necesario recalcar el razonamiento que permite entender el vínculo entre el proceso de extinción de dominio y el proceso penal puesto que este último se sirve de los indicios generados en la investigación del delito señalado en la tesis citada, como es el caso de lavado de activos, mediante lo cual se puede generar la secuencia procesal que conlleva a la limitación o restricción de las facultades que le corresponden a un propietario de determinado bien, sobre todo respecto al patrimonio que en su conjunto son identificados como parte del esquema delictivo de la organización criminal.

2.2. Definición de extinción de dominio

Es aquella consecuencia jurídico-patrimonial que extingue dominio, derechos y: “además traslada a la esfera del Estado la titularidad de los bienes que constituyen objeto, instrumento o efectos o ganancias de actividades ilícitas, mediante sentencia emitida respetando el debido proceso, sin indemnización ni contraprestación alguna a favor del requerido”. (Luján Túpez & Flores Aguilar, 2019, págs. 3-4)

Por tal motivo, existen órganos especializados en la extinción de dominio, ya que representa un proceso independiente y con autonomía de algún proceso penal, civil u otra naturaleza jurisdiccional o arbitral; por lo tanto, no puede invocarse la previa emisión de sentencia o laudo en estos para suspender o impedir la emisión de sentencia en aquél.

Legislativamente no ha tenido muchas variaciones, la última fue en el año 2018, se trata de un proceso que ha adoptado muchos matices del modelo colombiano. En cierto modo, la extinción de dominio es un proceso nuevo y por lo tanto no se ha aplicado mucho en la realidad, por lo que la jurisprudencia es escasa.

Adopta el título de extinción de dominio con el Decreto Legislativo N° 1373, pues anteriormente tenía su base legal en el Decreto Legislativo N° 1104, que regulaba la legislación sobre la pérdida de dominio. No obstante, la primera vez que se reguló el proceso de pérdida de dominio en el Perú fue a través del Decreto Legislativo N° 992, que entró en vigencia el 21 de julio del año 2007.

Pese a ser pocas veces aplicada, poco usado, e incluso poco tratado doctrinalmente; este proceso sui generis intenta darle respuesta a la problemática de que destino darle en su conjunto al patrimonio afectado, bienes, así como al resultado de su producción bajo la característica de ilicitud en su obtención, o de forma ilícita. Dicho eso, se puede afirmar que esta figura fue creada para tratar un problema en específico.

Conforme al Art. I del Título Preliminar del D.L. 1373, el proceso de extinción de dominio es susceptible de ser aplicado sobre todo bien patrimonial que constituya objeto, instrumento, efectos o ganancias que tiene relación o que se hayan generado mediante actividades ilícitas como: lavado de activos, tráfico ilícito de drogas, extorsión, trata de personas, contrabando, defraudación tributaria y/o aduanera, crimen organizado y delitos contra la administración pública y contra el medio ambiente).

Al igual que toda base legal, los vacíos y ambigüedades que pueda presentar el Decreto Legislativo 1373 en su interpretación o aplicación, se resuelven según la propia naturaleza y principios del proceso que regula. De modo que, supletoriamente se aplican las reglas del Código Procesal Penal o del Código Procesal Civil. Punto importante a tener en cuenta es que el decreto en mención, es aplicable incluso a causales que se hayan generado antes de la vigencia de la ley, es decir, tiene efecto retrospectivo.

Por su parte, Landínez (2019) refiere que: “La extinción de dominio no es retroactiva ni irretroactiva, es retrospectiva, pues regula situaciones ocurridas aún

antes de su vigencia, precisamente por el hecho de no haberse consolidado el derecho de dominio, dado el carácter ilícito de los bienes”. (pág. 13)

Conforme se puede apreciar de lo señalado, se trata de alcanzar una definición del carácter extintivo que alcanza a afectar a los dominios patrimoniales en tanto secuencia de actos judiciales, basándose en un argumento de los efectos que tiene respecto a su ámbito de aplicación temporal, lo cual resulta de valioso aporte para reconocer si aplica de manera posterior a la dación de la normativa que al regula o si tendría algún tipo de afectación sobre los bienes que se vinculan con procesos penales sobre crimen organizado que se han desarrollado de manera previa a su creación.

Cabe recalcar que tendría que revisarse adecuadamente el sentido o significado apropiado de los términos que se ha utilizado con el fin de alcanzar definición sobre este tipo de proceso judicial con respecto a su temporalidad de aplicación, así pues lo que se conoce como retroactividad opera en función a lo que se ha producido de manera previa a la creación en cuanto a lo referido a las reglas normativas que para el caso será la que regula la extinción de dominio como proceso.

De otro lado resulta interesante el hecho de que se anula la posibilidad de usar el término irretroactiva como una limitación a las acciones que permitirán enfocar su aplicación a una etapa posterior a su legislación, lo cual en cuanto a significados es apropiado. Resulta interesante además señalar que el carácter retrospectivo debe entenderse como una limitación a la retroactividad de las reglas, puesto que se presenta como una situación de aplicación de la ley que parte desde que se publica o

entra en vigencia para ejercer su efecto sobre una situación que se ha vinculado con otra norma publicada con anterioridad, y que muestran la característica de que dichos efectos normativos no han sido consolidados en la actualidad en que se ha producido el cambio de la regla.

Es importante considerar la relación con esta investigación en tanto que se entiende que la finalidad de esta forma de aplicación de las reglas bajo el carácter retrospectivo se asume bajo la asociación a los principios como son de “equidad e igualdad en las relaciones jurídicas”, lo cual forma parte de los principios general del derecho que se evocan en esta investigación. Todo lo señalado se proyecta con la intención de lograr el bienestar de las partes que intervienen en el proceso a fin de satisfacer la intervención del Estado sin vulnerar los derechos fundamentales y evitar actos discriminatorios o que lesionen el sentido de justicia que debe cumplir el sistema.

En relación a la naturaleza de este proceso, según el destacado docente nacional Jefferson Moreno (2020) infiere que: “la extinción de dominio es un proceso de naturaleza administrativa, pese a que la ley no lo reconoce directamente; sin embargo, al ser un proceso propiamente le corresponde todas las principios, garantías y prerrogativas de un debido proceso”. (pág. 1)

No es ajeno al entendimiento que el verdadero sentido de la intervención del Estado mediante la aplicación de las reglas que rigen el proceso de extinción de dominio tienen por finalidad la administración de los bienes que se han reconocido vinculados al ilícito penal en lo que corresponde al crimen organizado. Dicho de ee

modo importa comprender que el carácter administrativo que le corresponde por ello debe ceñirse a las reglas de dicho ámbito, en el cual también se indican pautas para llevar un adecuado proceso.

La connotación administrativa dejaría de lado la vinculación directa con el proceso penal pasando a ser un elemento accesorio de intervención del Estado, lo cual no resulta del todo apropiado, dado que en el caso de los procesos netamente administrativos no tendrían cabida los magistrados como representantes del Estado en la aplicación de dicho proceso, tendrían que ser los funcionarios del Estado en razón de la confianza que opera en dicha relación.

Por ello no se aprecia con beneplácito la contemplación de esta calificación del carácter administrativo, dado que la verificación del nivel de licitud que contempla la extinción de dominio respecto al origen de los bienes que se pretenden pasar a la administración del Estado, deberá regirse en función al análisis interpretativo de las reglas que aplican como principios y controlan las limitaciones correspondientes al carácter fundamental de las libertades y potestades existentes en el ordenamiento, tal cual se observa de las propiedades que trasladan efectos y atribuciones a quienes la ostentan, lo cual es aquello que se busca extinguir dado el vínculo ilícito de la adquisición de los bienes.

2.3. La propiedad como derecho fundamental

Conforme se puede apreciar en el diseño jurídico que orienta el respecto por el derecho de propiedad contemplado en el diseño de esta investigación a través de sus metas, se ha de considerar que los parámetros teóricos sobre los efectos que le

corresponden asumir a los propietarios de un bien a fin de resguardar el derecho de propiedad como tal. Es por ello que dicho de manera concreta, la propiedad es la que brinda a quien ostenta dicho título, los poderes o potestades directas e inmediatas respecto del patrimonio que representa su propiedad.

Es todo ello lo que permite que el titular del bien pueda hacer ejercicio de las capacidades inherentes a dicha condición material, esto es la disposición de su existencia libre de algún tipo de limitación que solo puede darse si resulta impuesta legislativamente. Por lo mismo se debe considerar un efecto sobre el destino del bien, bajo la aplicación de varias características facultativas que se amparan jurídicamente, puesto que la estructura normativa lo otorga de ese modo.

Bajo esta descripción se puede tomar en cuenta lo estudiado por Villagran (2003), en su informe de investigación que lleva por título “La Expropiación de los Derechos”, de la cual se puede recoger que:

El término que describe a la propiedad proviene de un latinismo “propietas”, el cual tienen un significado relacionado con la cercanía, lo cual invita a razonar sobre un concepto de adherencia de algo con un determinado objeto. “En el Derecho Romano Clásico, la palabra dominus o dominium derivaba de domus (casa), siendo expresiones técnicas para significar propietario y propiedad (...)”. Por lo mismo que se puede identificar como las potestades o atribución de poder que se le otorga aun determinado sujeto, esto se conoce como el señorío que vincula a un bien específico sobre un personaje, de acuerdo a ello se indica que “(...), en cambio la propiedad acentúa la pertenencia de una cosa a una persona, considerándose como un concepto mucho más amplio”. (pág. 36)

De acuerdo al criterio tomado de la percepción etimológica respecto a la condición instituyente de la propiedad como tal, se puede indicar que trata de un aspecto descriptivo que se ha producido en función a la evolución del pensamiento en el ámbito jurídico de Roma como base del pensamiento y estructura jurídica; siendo lo más rescatable el aspecto diferenciador realizado sobre lo que se concibe como efectos dominantes, que tenía un vínculo con los bienes, esto es la propiedad y sus efectos.

Del mismo modo, se puede citar la percepción del sentido de un propietario incorporado teóricamente por De La Cruz Salcedo y Morales (2011), cuyo trabajo académico lleva por título *“Modelo de Evaluación de los Principios de Responsabilidad Social Estatal: Propuesta para el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal COFOPRI – 2009”*, del cual se ha extraído la indicación:

“La propiedad es el elemento que proporciona a las familias y a los individuos una base socioeconómica sólida, que les permite fortalecer su identidad y participar formalmente en la sociedad. La posesión de una propiedad proporciona posibilidades de acceso a los servicios públicos y a los recursos financieros”. (pág. 38)

Igualmente a lo indicado se puede reconocer la existencia conceptual que separa al dominio respecto a la comprensión de los efectos de la propiedad como derecho, puesto que se presume una cuestión similar respecto a la diferenciación entre la postura que describe a la posesión frente a lo que se ha concebido teóricamente sobre la propiedad como tal. De este modo se aprecia que en tanto que

este último concepto otorga un sentido de consolidación en materia social y económica para el respaldo de la familia en la estructura estatal como sociedad; mas bien en contrario lo que se concibe como posesión solo estaría concebida como un medio para acceder al servicio público y los efectos o productos que genera el bien. De acuerdo a ello es posible indicar que la prerrogativa de la propiedad en cuanto a sus efectos resultan de un alcance mayor a los que implica la posesión como característica de un sujeto sobre el bien, lo cual se percibe de igual manera sobre el dominio como concepto devenido desde la época de Roma.

Con respecto a ello resulta de interés tomar en consideración lo indicado por Albaladejo (1997), el cual en su trabajo académico que lleva por título “Derecho de bienes”, lanza una descripción que conceptualiza el carácter del propietario bajo la siguiente percepción: “El máximo poder jurídico pleno sobre una cosa. Poder en cuya virtud, está en principio queda sometida directa y totalmente (es decir en todos sus aspectos y utilidades que pueda proporcionar) a nuestro señorío exclusivo” (p. 244).

Sobre el particular también se puede indicar la posición que asumen Ripert y Planiol (2000), los cuales en el desarrollo de su investigación titulada “Derecho Civil I” señalan como percepción conceptual sobre el tema que debe entenderse como “El Derecho en que una cosa se encuentra sometida de manera absoluta y exclusiva a la voluntad de una persona” (p. 402).

Tal percepción deja en claro el vínculo que se puede advertir de la existencia de un bien de carácter patrimonial, percibido como material y que produce bienestar a su propietario, para luego indicar esta relación como una cuestión dependiente, y

subyugante sobre el destino del elemento propiedad. Es de advertir que el sometimiento de la cosa por parte del propietario resulta un efecto natural trasladado al ámbito jurídico con el fin de proteger dicha adhesión, con la intención de mantener las capacidades del sujeto para establecer con carácter volitivo, determinadas acciones sobre el bien.

También es importante tener en cuenta lo señalado por De Ruggiero (1944) el cual describe en su investigación titulada “Instituciones de Derecho Civil”, quien teniendo en cuenta las indicaciones teóricas de Scialoja, hace la siguiente apreciación que en las relaciones derivadas en el ámbito particular “(...) en virtud de la cual una cosa, como pertenencia de una persona, está completamente sujeta a la voluntad de ésta en todo lo que no resulte prohibido por el Derecho público o por la concurrencia de un Derecho ajeno” (p. 534).

Esta definición para el caso de la formulación del problema planteado en esta investigación debe asumirse como el sentido de operatividad del derecho de propiedad que se vincula con el carácter volitivo de las decisiones que se toman sobre su destino por parte de quien ostenta tal derecho. El problema tendría enlace con la cuestión ilícita en tanto la adquisición o traslación de estos bienes se produzca bajo el sentido de la clandestinidad o la vinculación con actos ilícitos.

Sólo en el caso en que la concepción del derecho de propiedad estuviera viciada en sus orígenes, que más allá de la voluntad se consolide en razón de un acto con fines lícitos tendría la posibilidad de encontrarse con la posibilidad de que se

intervenga o anule dicha facultad ejecutiva de la propiedad como derecho, para lograr el cambio de titularidad para ser trasladado hacia el Estado.

También resulta prudente asumir la posición de Valverde y Valverde (1936), quienes desarrollan teóricamente el sentido de la propiedad en su trabajo titulado “Tratado de Derecho Civil Español”, manifiesta que: “La propiedad es el vínculo jurídico por el cual una persona tiene la facultad exclusiva sobre una cosa, a excepción de aquellos prohibidos por la ley” (p. 62).

Es importante resaltar esta condición de exclusividad que caracteriza al vínculo que hasta ahora se ha descrito sobre la propiedad como característica esencial de su ejercicio, puesto que ello garantiza la correcta ejecución de las potestades que le conciernen al dueño de la cosa; desde luego existirán siempre límites a la consolidación de estos efectos, pero únicamente pueden ser derivados de la propia ley, y desde luego deberán tener la suficiente justificación jurídica, para que la restricción propuesta sea válidamente ejecutada sin generar un perjuicio en base a actos arbitrarios.

Así pues, según el “Art. II del Decreto Legislativo N° 1373”, en el sistema de justicia se identifican factores enfocados en la garantía de ciertos elementos que forman la estructura de organización social, como es el caso de la participación de como elemento de protección a la adhesión que existe entre quien ostenta la propiedad y el objeto material que representa su patrimonio; de igual manera se produce una protección sobre algunos otros elementos que constituyen libertades vinculadas con el bien patrimonial. La principal característica que debe tener esta

vinculación y que se traslada al origen de la obtención de dichos bienes, es que sea bajo el carácter de licitud, o que la finalidad que se destinado para su uso sea la más idónea o apropiada para efectos de aprovechamiento particular y el incremento de condiciones sociales que proyecta la propiedad.

El sentido del análisis que se plantea sobre el carácter inherente de los efectos que produce la propiedad respecto a la cosa que se comporta como elemento patrimonial adherido a los intereses del sujeto que la ostenta, esto es al propietario, resulta de válida connotación normativa, esto en tanto que se desprende de la propia normativa constitucional. El nivel de importancia de la existencia de este concepto, se deriva incluso de la función que cumple en el ámbito del desarrollo social, esto es que partiendo de la consolidación de los intereses particulares, llega a construir un espacio de seguridad que socialmente interesa al Estado para el desarrollo de la comuna como tal.

Vale decir que la existencia de la propiedad tiene un doble sentido, tanto particular como social, por lo cual se alcanza a señalar que la propiedad más allá de un derecho representa una condición obligatoria que se desprende de los intereses sociales, puesto que es obligatorio que el propietario haga uso de sus facultades para explotar su bien a fin de generar movimiento económico. Esta acción de movimientos generan no solo riqueza para el propietario sino ventaja social en tanto que respalda la economía social en todos sus niveles, propiciando el crecimiento económico.

2.4. El proceso de extinción o pérdida de dominio

Con el fin de alcanzar una correcta comprensión del sentido de esta investigación se ha considerado como parte del análisis académico, la verificación de lo que se percibe como extinción de aquel elemento que se desprende de la propiedad referido al dominio sobre la cosa, lo cual se ha plasmado como parte de la estructura legal que limita este ejercicio de potestad propietarias; desde luego la justificación de este tipo de intervención de parte de la acción social que le corresponde al Estado, se justifica como la necesidad de controlar, así lo indican Muñoz y Vargas (2017) quienes hace un estudio titulado “La extinción de dominio y la afectación de derechos: análisis comparativo”, de la misma que se ha tomado la siguiente afirmación:

Es posible sostener que a nivel internacional existen ordenamientos jurídicos en los que se establece este tipo de restricción al derecho de propiedad, ello bajo la justificación de un “(...) combate contra la corrupción y la criminalidad organizada, en su aspecto económico para debilitarlas y no se reproduzca y así, ser reutilizado en función social bajo la titularidad del Estado”. (p. 27)

Mediante Resolución Administrativa N° 122-2019-CE-PJ, “con fecha 20 de marzo del 2019, se constituye el Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio y a la vez, se dispuso la creación de 21 Juzgados Especializados y 3 Salas de Apelaciones Especializadas a nivel nacional que conforman dicho subsistema.” (Luján Túpez & Flores Aguilar, 2019, pág. 1). En otros términos, los legisladores creyeron conveniente instaurar órganos especializados (sedes judiciales) para atender exclusivamente los procesos de extinción o pérdida de dominio.

De acuerdo a todo lo señalado, se puede comprender el fin de dicha tendencia jurídica basada en justificaciones teóricas respecto al control de la acción delictiva relacionada con actos corruptos, que tiene por máxima función el desarticular desde el ámbito de la economía que puedan estar manejando este tipo de organizaciones. Es por ello que se pretende establecer un control mediante la restricción de los derechos que le conciernen en función a propietarios de aquellos bienes que forman un vínculo con el ámbito criminal, esto es que su origen constituye un carácter ilícito.

2.5. Críticas a la eficacia del proceso de extinción de dominio

Una primera detracción se ubica al momento que algunos fiscales durante la etapa de indagación solicitan medidas cautelares, siendo posteriormente autorizadas por el Juez y en definitiva ejecutadas, sin que el requerido tenga conocimiento alguno. Toda vez que el emplazado se entera del proceso de extinción de dominio y de las medidas cautelares recién cuando se admite la demanda por extinción, que es presentada por el fiscal luego de haber recabado todas las pruebas y elementos incriminatorios necesarios.

Ahora bien, sobre la etapa de indagación, cabe precisar que deberá iniciarse cuando el fiscal tenga una base sólida respecto de que los bienes, efectos, ganancias, instrumentos tienen un origen ilícito. Es por ello que, aunque la Ley del proceso de extinción de dominio no lo mencione, el fiscal debe responder previamente a una etapa de calificación.

Esta facultad discrecional de los fiscales para indagar les permite también requerir información a instituciones, que posteriormente deberán mantener en reserva y en confidencialidad la información entregada, para que obviamente el emplazado no tome conocimiento de la existencia de tales investigaciones (buscando evitar que cometa actos temerarios u obstruccionistas); es por tal motivo que recién se entera con la admisión de la demanda que hace el Juez a cargo.

Como se mencionó en líneas anteriores, luego de la etapa de indagación, el siguiente paso será formular una demanda de extinción de dominio, y para esto será el fiscal quien tiene la carga de la prueba, es decir, antes de dar inicio o apertura a la fase inicial será él quien reúna las pruebas necesarias para demostrar que los bienes, efectos, ganancias posiblemente tienen un origen ilícito.

Si bien es cierto, a partir de esta admisión de la demanda el emplazado podrá defenderse presentando los descargos respectivos, contestando la demanda, acudiendo a la audiencia inicial y luego a la audiencia probatoria. En tal sentido, una vez dentro del proceso de extinción de dominio será el requerido quien tiene la carga de probar que los bienes tienen un origen lícito.

Sin embargo, la problemática para gran parte del sector doctrinario radica en que se admita la solicitud, la autorización y posteriormente se ejecuten medidas cautelares, sin que el requerido tenga conocimiento alguno sobre ellas; por ende, coinciden en la postura tajante y crítica en el sentido que los jueces y fiscales deben velar por el respeto que de los derechos, garantías y principios fundamentales del Derecho en todos los procesos a su cargo.

Tal contrariedad guarda mucha relación con la preponderante autonomía que se le ha otorgado al proceso de extinción de dominio, toda vez que, este singular procedimiento ni siquiera permite cuestiones previas, ni cuestiones prejudiciales. Entonces, al no depender de ningún otro proceso, puede surgir por sí solo; resumiéndose la extinción de dominio a un proceso de naturaleza jurídico patrimonial totalmente independiente.

En la práctica, “aperturada la fase judicial del proceso de extinción de dominio, notifican al requerido y este tendrá un plazo para apelar las medidas cautelares, pero ya prácticamente no serviría de ayuda. Ya que, dicha apelación se realiza sin efectos suspensivos” (Moreno, 2020, pág. 1).

Capítulo III

Los principios generales del derecho y su control sobre el proceso de extinción de dominio

3.1. Definición de principios

Al igual que la mayoría de acepciones e incluso la concepción que parte de la propia construcción teórica que rige el sentido general del derecho como regla, es posible conceptualizar “los principios” se ha tornado gradualmente dificultoso para lo doctrinarios, debido a que sus cimientos ideológicos están supeditados a condiciones relacionadas con la estructura jurídica que se ha establecido con el paso del tiempo. Por consiguiente, sólo se citarán autores que más se aproximen al concepto requerido; así pues, Díaz Couselo (1971) indica que:

Los principios son aquellos juicios de valor, anteriores a la enunciación de la norma positiva, referidos a la conducta de la norma positiva, que se alude a la conducta de los hombres en su interferencia intersubjetiva, y que fundamentan la creación normativa legislativa o consuetudinaria. (pág. 75)

Debe entenderse que la principal finalidad que cumplen los principios es la de apoyar en el entendimiento de las reglas que no son lo suficientemente específicas o claras para ser asumidas en la realidad, a fin de poder aplicarlas de manera correcta mediante la interpretación con base en las reglas que se conocen como máximas de la construcción del derecho, o reglas ut supra, que condicionan un carácter general de comprensión. Básicamente se alcanza este nivel de

comprensión de acuerdo a la verificación de los efectos sobre los derechos fundamentales, que debieran ser materia de comprensión y respeto de manera predominante sobre el resto del ordenamiento jurídico, así se alcanzaría un sentido de igualdad en el manejo de las reglas, pues estaría aplicándose de manera optimizada el derecho como regla que se supone asegura el bienestar personal y social.

Por su parte, Barriga Albis (2019) citando la postura positivista de Manuel Albaladejo refiere: “(...) los principios son las ideas fundamentales que informan nuestro Derecho positivo contenido en leyes y costumbres y, en última instancia, aquellas directrices que derivan de la justicia tal como se entiende por nuestro ordenamiento jurídico”. (pág. 18)

Son denominados “principios”, por cuanto constituyen los soportes primarios estructurantes del sistema jurídico, al que prestan su contenido; estos constituyen el basamento en que se asienta y fundamenta el ordenamiento positivo en general, la fuente perenne de renovación y reinvento para todo el ordenamiento jurídico.

En efecto, la jerarquía e importancia de los principios generales del Derecho es indiscutible en todos los campos, según Lico (2018):

Destacan por tal peculiaridad debido a que en todo sistema jurídico existen gran cantidad de reglas generales, realmente fundamentales, en el sentido de que a ellas pueden vincularse, de un modo directo o

indirecto, una serie de soluciones expresas del Derecho positivo a la vez que pueden resolverse, mediante su aplicación, casos no previstos, que dichas normas regulan implícitamente. (págs. 2-3)

En definitiva, estos principios se refieren a las nociones básicas, postulados éticos, o criterios fundamentales, sin importar que estén positivizados o no; tales principios son importantes para condicionar y orientar la formación, interpretación y unificación del ordenamiento jurídico (legal y jurisprudencial) y, consuetudinario. Por tal razón es que la actividad legislativa que proyecta la estructura jurídica del ordenamiento que rige los destinos de la sociedad, debe ser pautada por un carácter de garantías y protección de derechos, esto es necesario en tanto que proyecta no solo un carácter de igualdad y equidad en los efectos del derecho, sino que también inspira un sentido de seguridad jurídica.

3.2. Los principios generales del derecho y su función de control

Estos principios despliegan un rol de suma importancia en la organización del ordenamiento jurídico peruano, “puesto que permiten no solo interpretar las normas, sino además sirven de base para la construcción jurídica y facilitar la labor del operador del derecho, al generar insumos para cubrir los vacíos del derecho positivo”. (Guzmán Napurí, 2009, pág. 228)

En esa misma línea, Obregón (2011) señala que, los principios generales del derecho “(...) son conceptos o proposiciones que ayudan a llenar los vacíos legales. Estos principios tienen niveles que van desde aquellos que tienen valor universal

hasta aquellos principios cuya aplicación está delimitada a alguna de las ramas del derecho”. (pág. 375)

Efectivamente, los principios generales del derecho representan aquellas pautas que sirven de orientación a los operadores jurídicos para completar aquellos supuestos no previstos por el Derecho.

“Asimismo, algunos de estos principios son aplicables a todo el ordenamiento jurídico, como los contenidos en el Título Preliminar del Código Civil, pero algunos otros a una rama específica como en el caso del derecho procesal, tributario, administrativo, etc.” (Coca Guzmán, 2020, págs. 5-6)

En general, los principios generales del derecho, así como aquellos principios que corresponden a cada rama del mismo, sirven para interpretar las normas justo donde la aplicación literal no es posible. Conforme señala Guzmán (2020): “cuando se advierta una norma imperfecta (defecto) o se presente alguna laguna del derecho (deficiencia), los operadores jurídicos deberán recurrir a los principios generales y/o al derecho consuetudinario”. (págs. 3-4)

3.3. Efectos de los principios generales del derecho sobre los procesos judiciales

Si nos basamos en que los derechos fundamentales pueden ser, y de hecho son paralelamente, principios generales, libertades públicas y/o garantías procesales que les competen a todos los partícipes de un proceso judicial. En tal caso, sin distinción que se exhorta un derecho fundamental procesal, derecho humano, libertades públicas o garantías institucionales; es trascendental que sean respetados a cabalidad para la vigencia de un Estado democrático y de derecho.

En consecuencia, ceñidos a la delimitación realizada por Caro Coria (2006), al referirnos a garantías constitucionales del proceso penal debe entenderse:

(...) Aquel cúmulo de principios, derechos y libertades de carácter fundamental reconocidos por la Constitución y, en sentido amplio, por los tratados internacionales, que tienen por finalidad otorgar al imputado un marco de seguridad jurídica y, en última instancia, mantener un equilibrio entre la búsqueda de la verdad material y los derechos fundamentales del imputado. (pág. 1028)

Justamente, de ahí surge la necesidad de que el Estado deba velar por el respeto y la protección de los derechos fundamentales del procesado, viéndose un tanto obligados a especificar en la Constitución, los límites del ejercicio estatal (Poder Judicial). Esta tendencia latinoamericana de fijarlas en la Ley Fundamental se debe a que la carta magna simboliza un tipo de cuerpo normativo imprescindible, además de ser la norma básica del ordenamiento jurídico de un Estado y que, establece las condiciones mínimas de actuación pública y privada.

De esta manera, los principios generales del derecho que, conforme Rodríguez (2008) refiriéndose Díez-Picazo, señala: “otrotra planeaban por encima del ordenamiento como espíritus puros o casi angélicos, se encarnan y concretan en la Constitución y en ella obtienen el medio técnico y eficaz de su función informadora”. (pág. 464)

El proceso judicial, ratificado por diversos reconocimientos constitucionales, busca no sólo dotar al imputado de un marco de garantías jurídicas, sino en definitiva procura mantener un equilibrio entre la búsqueda de la verdad real o material y, los derechos fundamentales del imputado; lo que constituyen una limitación de la sanción punitiva, cuya protección y respeto no pueden ni deben ser distantes a una justicia penal contemporánea.

Partiendo de que el proceso de extinción de dominio forma parte del derecho procesal, y este a su vez es entendido como un sistema de garantías que tienden a lograr la tutela judicial efectiva. Resulta conveniente citar, lo manifestado por Lorca Navarrete (2003), para quien:

El derecho procesal surge regulando jurídicamente el ejercicio de la función jurisdiccional y, desde esa perspectiva, se sitúa, no como un mero instrumento jurisdiccional atemporal, acrítico y mecanicista sino, ante todo, como un sistema de garantías, que posibilita la rotunda aplicación de los principios generales del derecho, en orden a lograr la tutela judicial efectiva, y básicamente ordenado a alcanzar un enjuiciamiento en justicia. (pág. 532)

3.4. La aplicación de principios en el desarrollo del proceso de extinción de dominio

Los principios generales, al verse comprendidos en la totalidad de procesos estipulados en los Códigos pertinentes, del mismo modo, están vinculados de manera proporcional que se vincula con este tipo de acción judicial sobre el carácter de domino resultando muy importante su función de control que tienen por atribución.

El Art. II del Decreto Legislativo N° 1373 y su reglamento, han establecido una serie de principios específicos, es decir, han plasmado en su base legal un catálogo de criterios y principios que se deben respetar mientras esta acción del sistema de justicia. A continuación, se detallarán cada uno de estos:

- a. Nulidad: la totalidad de actos que recaigan sobre bienes de origen o destino contrario al ordenamiento jurídico, son nulos de pleno derecho; sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe (estos sujetos pueden participar en el proceso de extinción de dominio acreditándole al juez su buena fe).
- b. Especialidad: los vacíos y ambigüedades que pudiera exhibir este decreto, ya sea en su interpretación o aplicación, se resuelven con los principios del proceso que regula y la propia naturaleza del acto. Si a pesar de esta sustitución, persiste el vacío o ambigüedad, se recurre a la 8va disposición complementaria final (ante un problema de vacío legal se debe acudir al Código Procesal Civil o, en su defecto, al Código Procesal Penal).
- c. Autonomía: tal como se viene mencionando, la categorización de este tipo de proceso como tal bajo condiciones autónomas, indica que se desvincula del resto de procesos relacionados tanto con la protección de derechos civiles así como lo vinculado a la sanción de las acciones delictivas, esto en tanto que no precisa de una determinación previa sobre la condición de ilicitud que vincule al bien materia de extinción respecto a su dominio.

d. Dominio de los bienes: la protección del derecho de propiedad recae sobre bienes obtenidos con justo título y que estén destinados a fines compatibles con el ordenamiento jurídico. En ese sentido, poseer o utilizar bienes de origen ilícito o destino ilícito no constituye justo título, salvo el derecho del tercero de buena fe.

e. Aplicación en el tiempo: según su misma regulación, mediante este criterio la extinción de dominio se declara con independencia de que los presupuestos para su procedencia hayan ocurrido con anterioridad a la vigencia de este decreto legislativo en tratamiento.

f. Tutela Jurisdiccional y Debido Proceso: se trata de derechos fundamentales a los que, en paralelo, se le reconoce el derecho a la defensa, a la prueba y a la doble instancia; que forman parte del contenido del derecho al debido proceso.

g. Publicidad: este proceso es público recién a partir de la notificación del auto que admite la demanda de extinción de dominio que se puede dar desde su materialización en razón de una medida cautelar, pero lo que se ejecuta partiendo del origen temporal donde se indaga, resultan de carácter reservado y no solamente son reservadas, sino que el requerido no podría tener conocimiento de él, que es lo que usualmente pasa.

h. Cosa juzgada: se reconoce en materia de extinción de dominio, se pueda aplicar el principio de la cosa juzgada, siempre que existan sus criterios como la triple identidad: identidad de sujeto, objeto y fundamento.

i. Carga de la prueba: esta atribuida como potestad del fiscal durante todo el tiempo en que se indaguen los hechos y hasta ofrecer las pruebas o indicios razonables del origen o destino ilícito del bien para presentar la demanda de extinción de dominio. Una vez admitida a trámite dicha demanda, corresponde al requerido o emplazado demostrar el origen o destino lícito del bien o bienes afectados.

Capítulo IV

El análisis de los resultados

Tal cual se ha indicado en el diseño de la investigación, se ha tomado como punto de partida la construcción teórica mediante la recopilación de fuentes de información que permitieron alcanzar el nivel de comprensión deseado sobre el sentido de autonomía y condiciones generales de protección y justificación que debe caracterizar al proceso judicial bajo análisis. Luego de esta acción de recopilación y análisis, conviene trasladar la intención académica hacia el reconocimiento de las condiciones en las que se ejecuta este proceso judicial en la realidad, por lo mismo que se ha convenido el análisis de ciertos documentos y la recopilación de la opinión jurídica que plasme el verdadero sentido de análisis de este proceso.

4.1. Resultado de la evaluación de expedientes judiciales sobre extinción de dominio

Tal cual se ha indicado en la unidad de análisis de la proyección de esta tesis, se han revisado los expedientes judiciales sobre extinción de dominio extraídos de la información proporcionada por el Poder Judicial, lo cual se ha basado en la revisión del inicio del proceso, en los cuales se han ubicado como denominador común la justificación de la acción estatal en razón de la noticia criminal que constituye un indicador del presunto delito. Cabe indicar que a este nivel el hecho ilícito aún cuando se tratara de flagrancia aún no ha sido corroborado y menos determinado respecto a la responsabilidad penal sobre el presunto agente, al cual se le restringe el derecho de propiedad en función a un tratamiento paralelo de la acción penal.

En función a lo señalado en la unidad de análisis se ha solicitado a la entidad correspondiente el acceso a la información lo cual se puede corroborar con la captura de pantalla que se muestra en el anexo 2 de esta investigación, donde se aprecia la remisión de los archivos que corresponden a 15 expedientes judiciales sobre el proceso de extinción de dominio el día 5 de diciembre del año 2022. Es en función a esta muestra que se ha procedido al análisis antes indicado, del cual se corrobora que la característica autónoma del proceso de extinción de dominio no se ajusta a los parámetros del debido proceso y la protección de la garantía de la propiedad.

Lo señalado se pauta en virtud de las características que se advierten de la estructura del proceso en sí, puesto que no se motiva de manera correcta o directa la fuente de ilicitud, ya que se precisa de una condición de análisis jurídico idóneo para determinar de manera concreta, el carácter ilícito respecto al origen de los bienes. Ello debe asumirse en tanto que la condición de ilicitud esta directamente ligada a la acción de la criminalidad, por lo mismo que la característica del análisis no puede ser desligada de este tipo de acciones que comprenden de manera exclusiva al ámbito penal para el establecimiento de su existencia como tal; por ende no se considera apropiada la característica observada en los expedientes analizados, pues salen del ámbito de la congruencia de análisis y no justifican una condición autónoma.

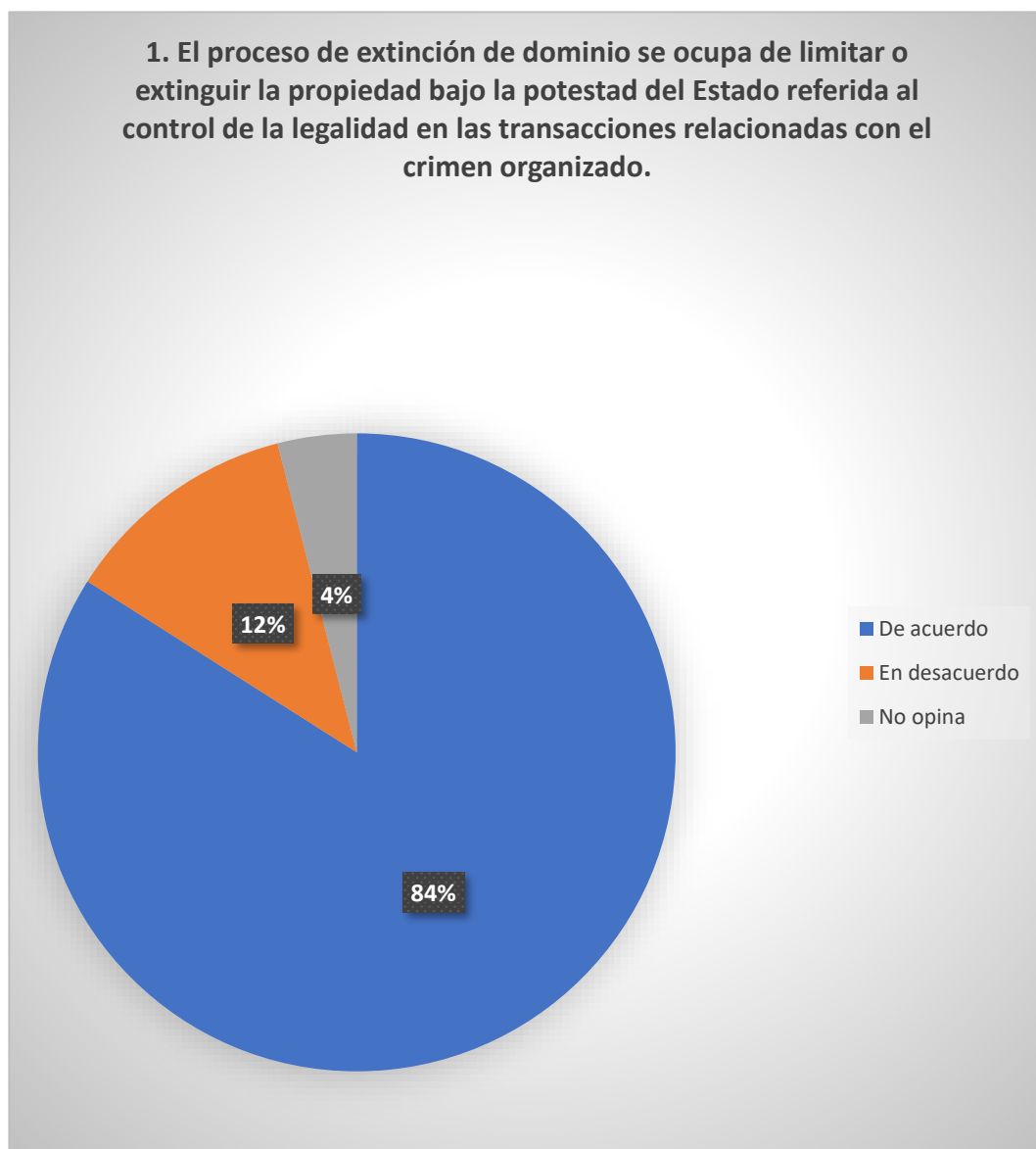
4.2. Resultado de la encuesta aplicada a los expertos en derecho

Tabla 1: “Tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos del distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 1”

1. “El proceso de extinción de dominio se ocupa de limitar o extinguir la propiedad bajo la potestad del Estado referida al control de la legalidad en las transacciones relacionadas con el crimen organizado”.

Opciones	Respuestas
a. De acuerdo	42
b. En desacuerdo	06
c. No opina	02
Total	50

Ilustración 1: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos del distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 1”



OBSERVACIÓN: Según lo que se aprecia del resultado obtenido en función a los porcentajes de la tabulación de estos, se tiene un 84% del total de los encuestados que indican su postura favorable respecto a la afirmación primera de la encuesta que se inclina a definir el proceso de extinción de dominio. Esta apreciación se presume esta vinculada con el concepto directo de este tipo de proceso, puesto que se pretende establecer un efecto de restricción del derecho de propiedad que corresponde a un sujeto que ha sido vinculado con la comisión de delitos, para en función a ello

establecer el criterio que describe como ilícito el origen de los bienes cuya propiedad se encuentran bajo su titularidad.

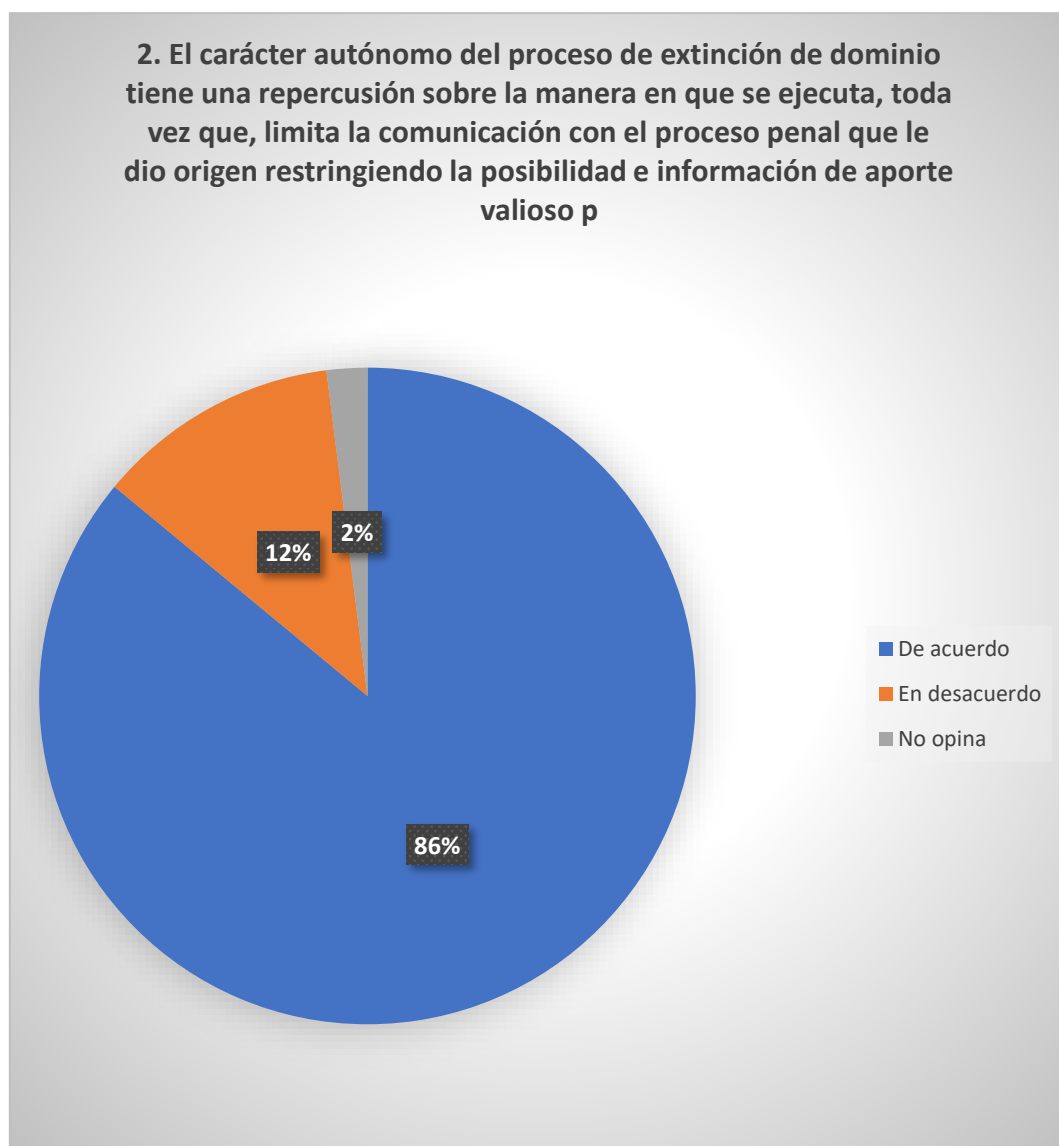
Esto es importante en tanto que la posición de garantía que ofrece el ordenamiento jurídico constitucional sobre el derecho de propiedad no se muestra como absoluto, por lo mismo que se obtiene este resultado que vincula al poder del Estado sobre las condiciones de ilicitud, para ostentar el dominio del bien que se reconoce como ilegítimo en razón de tal condición.

Esta apreciación es lo que justifica la intervención del Estado para trasladar el dominio del bien desde la esfera individual o particular que ostenta el propietario vinculado con la acción delictiva dentro el grupo criminal, para que sea trasladado dicho dominio a una esfera de dominio público, a fin de satisfacer los intereses sociales que asumen los bienes adscritos al Estado.

Tabla 2: “Tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos del distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 2”

2. “El carácter autónomo del proceso de extinción de dominio tiene una repercusión sobre la manera en que se ejecuta, toda vez que, limita la comunicación con el proceso penal que le dio origen restringiendo la posibilidad e información de aporte valioso para el reconocimiento de los bienes ilícitos”.	
Opciones	Respuestas
a. De acuerdo	43
b. En desacuerdo	06
c. No opina	01
Total	50

Ilustración 2: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos del distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 2”



OBSERVACIÓN: Según se muestra en el resultado u 86% del total de los encuestados se orienta hacia la aceptación de la postura crítica planteada en la segunda afirmación de la encuesta, vale decir que están de acuerdo con el comentario crítico diseñado respecto a la estructura del proceso de extinción de dominio, basado en el tenor de la autonomía del proceso, que sin duda alguna muestra condiciones de ineficacia.

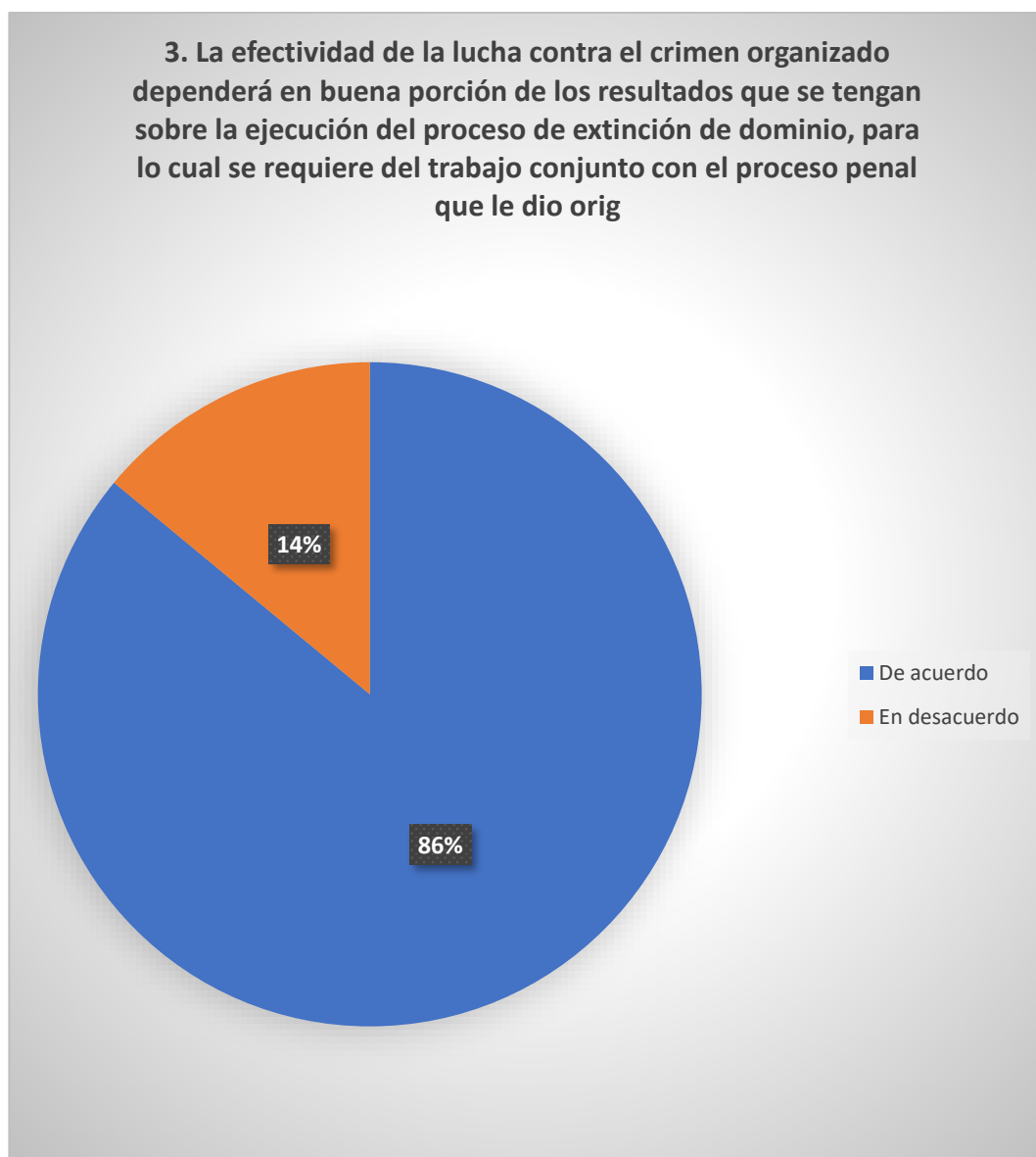
Estas condiciones de ineficacia se validan en razón de la ausencia de comunicación que se presenta como actual característica del proceso basado en su condición autónoma, que sin duda alguna esta incorrectamente comprendida, vale decir que las funciones para las que se ha creado debería contener un solido esquema basado en el respeto irrestricto de los principios generales del derecho.

Ello implica señalar que la condición autónoma del proceso no representa como posibilidad alguna que se consolide como una cuestión que confunda el efecto con una situación de independencia, esto es que las funciones que cumple el derecho de protección a los intereses, debe estar por encima de las condiciones asumidas como necesarias para asegurar la captura del dominio de los bienes.

Tabla 3: “Tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos del distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 3”

3. “La efectividad de la lucha contra el crimen organizado dependerá en buena porción de los resultados que se tengan sobre la ejecución del proceso de extinción de dominio, para lo cual se requiere del trabajo conjunto con el proceso penal que le dio origen”.	
Opciones	Respuestas
a. De acuerdo	43
b. En desacuerdo	07
c. No opina	00
Total	50

Ilustración 3: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos del distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 3”



OBSERVACIÓN: Al verificar el resultado obtenido de la encuesta aplicada, se aprecia un 86% del total de operadores jurídicos cuya opinión es favorable respecto a la propuesta de la investigación, como solución al efecto inadecuado que se observa de la condición autónoma del proceso de extinción de dominio. Por lo mismo que la aplicación de los principios se torna en un elemento preponderante para la correcta ejecución tanto de la construcción estructural de los esquemas procesales,

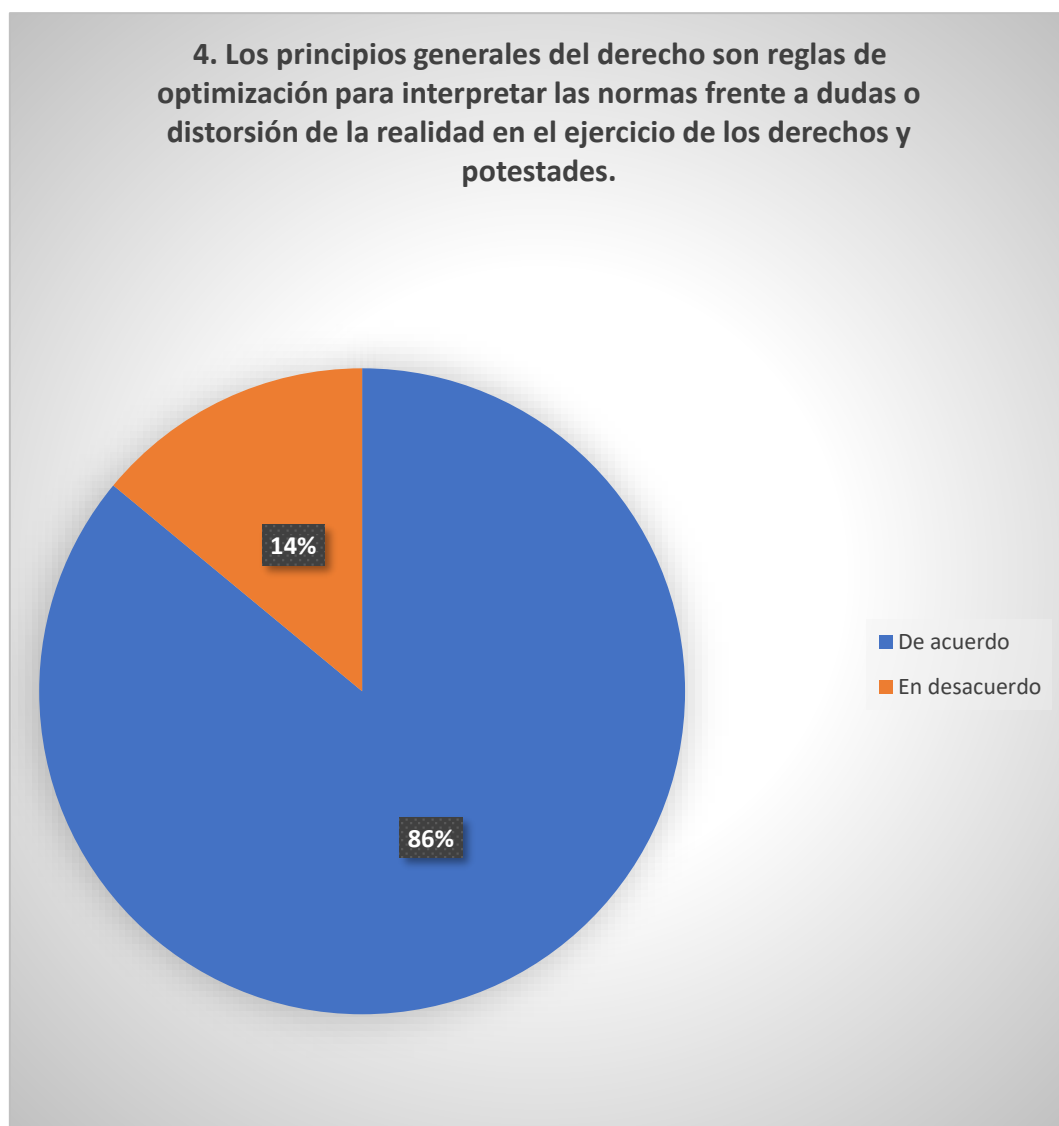
así como la creación de las directrices que se ocupan del control de su ejecución en pos de la garantía de los derechos de las partes intervinientes.

En tal sentido la vinculación de los resultados con los eventos generados en la investigación penal, sin duda alguna guardan relación, ello en tanto que para combatir el índice criminal no bastará con la reducción o limitación económica que se proyecta con la extinción de dominio, sino también con el éxito que se tenga en la atribución de responsabilidad penal en el proceso.

Tabla 4: “Tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos del distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 4”

4. “Los principios generales del derecho son reglas de optimización para interpretar las normas frente a dudas o distorsión de la realidad en el ejercicio de los derechos y potestades”.	
Opciones	Respuestas
a. De acuerdo	43
b. En desacuerdo	07
c. No opina	00
Total	50

Ilustración 4: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos del distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 4”



OBSERVACIÓN: Tal cual se visualiza en el resultado porcentual, existe un 86% de la población encuestada que se ha orientado su postura sobre el sentido optimizador de los principios generales del derecho, en lo que se puede ubicar cuando menos dos que conciernen al tema del desarrollo de la extinción de dominio como proceso autónomo. Estos son primero el principio de legalidad, que implica la necesaria existencia de pautas normativas válidamente justificadas para determinar el carácter autónomo de dicho proceso, ello a fin de justificar los efectos negativos

que se pueda dar sobre el derecho de propiedad, que, en tanto constitucionalmente protegido, adquiere una jerarquía tal, que precisa de un fundamento sólido para ser superado en sus efectos.

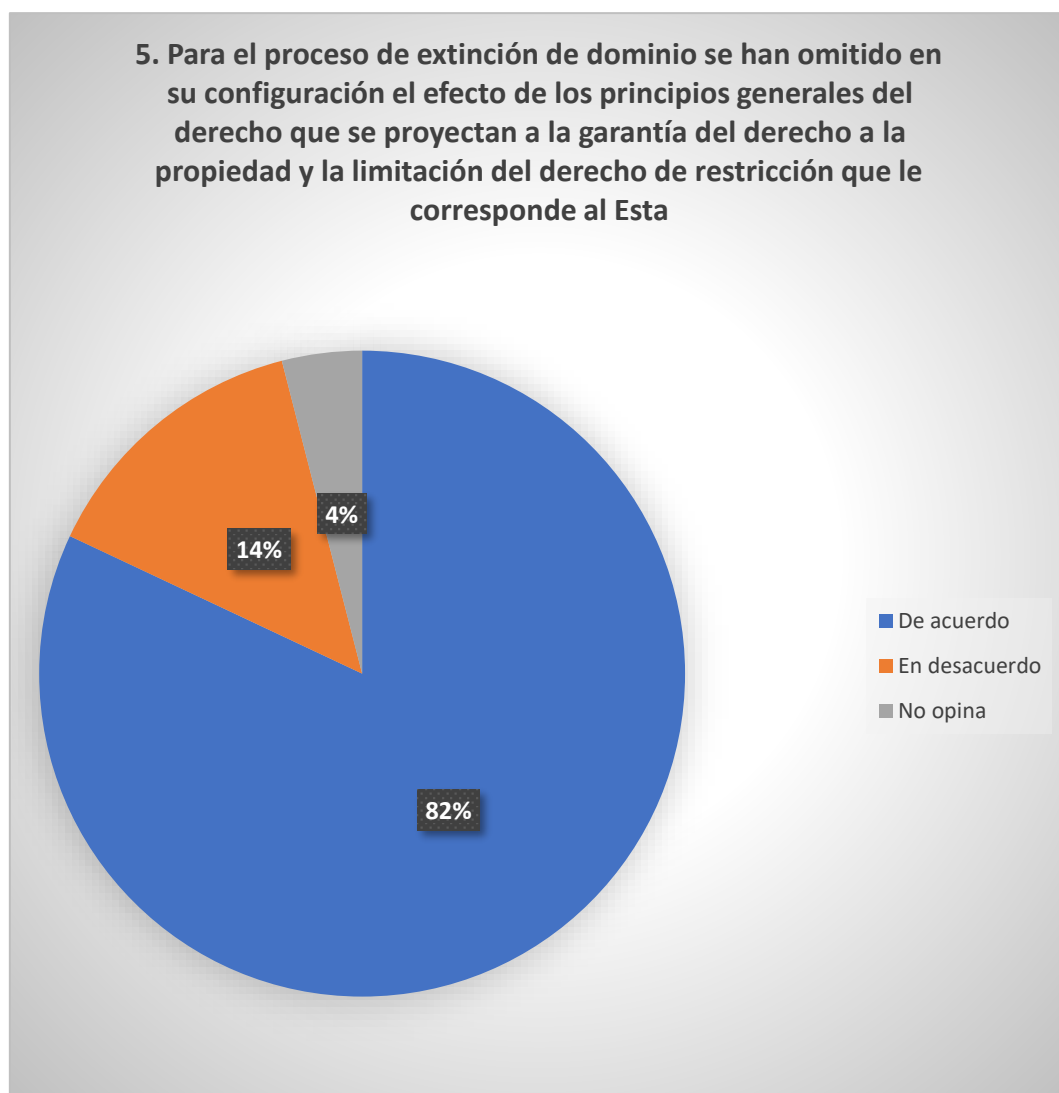
De otra parte, se encuentra el debido proceso que ha de servir de orientación hacia el desarrollo de un proceso dentro de los parámetros procesales correctos, como tal servirá de pauta para la interpretación de la regla que permite la traslación del dominio hacia el Estado, que según se advierte consolida un elemento justo de correspondencia, el cual se verifica entre el origen ilícito y la nulidad de los efectos de la propiedad como derecho. Se requiere pues, de la necesaria existencia de elementos de seguridad jurídica que acompañen a tales determinaciones judiciales, que se basan en el origen ilícito para la obtención del bien, lo cual no se condice con una determinación exacta mediante un acto firme, sino simplemente por una vinculación con la noticia criminal.

Tabla 5: “Tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos del distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 5”

5. “Para el proceso de extinción de dominio se han omitido en su configuración el efecto de los principios generales del derecho que se proyectan a la garantía del derecho a la propiedad y la limitación del derecho de restricción que le corresponde al Estado”.

Opciones	Respuestas
a. De acuerdo	41
b. En desacuerdo	07
c. No opina	02
Total	50

Ilustración 5: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos del distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 5”



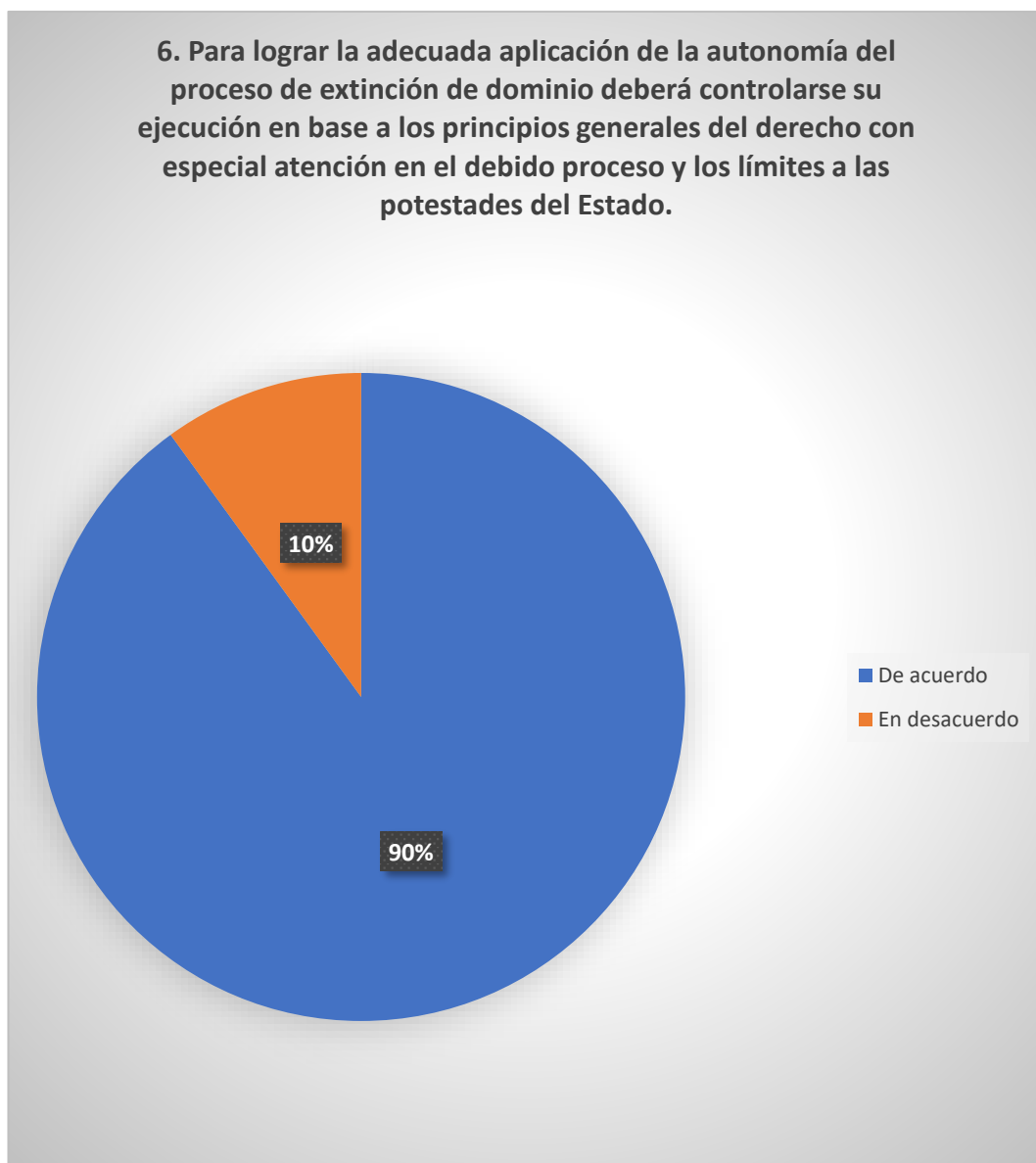
OBSERVACIÓN: El 82% de los encuestados en el trabajo de campo de esta investigación, se han inclinado mayoritariamente hacia la postura crítica planteada en la tesis, es así que la observación de la regla destinada a restringir derechos en el ámbito de la propiedad bien puede ser válida en tanto que sea construida en función a los principios que rigen la estructura jurídica. Esta configuración se advierte como incompleta en tal sentido, vale decir que no se ha contemplado de manera adecuada la estructura principista del ordenamiento jurídico.

Sobre todo, debe establecerse un mecanismo de control más óptimo el cual se ha de consagrar en función a las peculiaridades que representa la acción estatal, para el caso estudiado, la intervención del Estado tiene como objeto principal la lucha contra el crimen; esta finalidad debe ser atendida de acuerdo a las limitaciones que existen en el ámbito constitucional. Tales limitaciones configuran una estructura de protección sobre derechos como es el caso de la propiedad, que sin duda requiere de una justificación válida y superior a su jerarquía para ser limitado; de igual modo se verifica la presencia de inconsistencia jurídica en el ámbito del debido proceso, puesto que se requiere de una secuencia válida para la ejecución de las acciones limitativas, dado que la restricción planteada asume una postura basada en un hecho no corroborado, solo por un supuesto de vinculación con la acción delictiva.

Tabla 6: “Tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos del distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 6”

6. “Para lograr la adecuada aplicación de la autonomía del proceso de extinción de dominio deberá controlarse su ejecución en base a los principios generales del derecho con especial atención en el debido proceso y los límites a las potestades del Estado”.	
Opciones	Respuestas
a. De acuerdo	45
b. En desacuerdo	05
c. No opina	00
Total	50

Ilustración 6: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores jurídicos del distrito judicial de Lambayeque, sobre la afirmación 6”



OBSERVACIÓN:

Se ha obtenido como resultado de la encuesta sobre la afirmación que alcanza un contenido propositivo respecto a la extinción de dominio, un total de 90% de apoyo, lo cual constituye una suerte de validación de parte de los operadores jurídicos en tanto conocedores del tema. El sentido de la postura se advierte como válida en tanto que se requiere de precisiones específicas sobre el tema de la autonomía del

proceso de extinción de dominio, se necesita que cumpla con parámetros ya establecidos sobre la configuración del ordenamiento jurídico.

Primero, respecto a la consagración de un esquema acorde con el debido proceso, sobre todo en cuanto al fundamento de la acción que le corresponde al Estado, ello en tanto que la intervención habrá de basarse en la existencia de un hecho válido y corroborado, esto significa que no tendría validez si es que se sometiera el derecho de propiedad a la restricción basado en un supuesto de hecho y no jurídico firme.

Capítulo V

La contrastación de la hipótesis

La estrategia de la investigación planteada conlleva a la construcción de esta sección en la que se plasman los aspectos resultantes del análisis, esto con la finalidad de alcanzar una postura adquirida por la observación de la base teórica que circunda a la propiedad como derecho y a la justificación de autonomía del proceso de extinción de dominio. Esta condición especial se la que se describe críticamente a través de la discusión desarrollada sobre cada uno de los objetivos específicos, para luego dichas posturas ser llevadas al nivel comparativo con el resultado de la validez de cada una de las variables y finalmente establecer la determinación que muestra la determinación de este trabajo académico.

5.1. La discusión de los resultados

5.1.1. Discusión sobre el objetivo: “Identificar el fundamento jurídico justificante de la autonomía del proceso de extinción de dominio”

Con respecto a la discusión de este primer objetivo, debe tenerse en cuenta que el primer punto se ha referido a la recopilación de datos que muestran el nivel de conocimiento que se hubo alcanzado sobre el tema del proceso extinción de dominio lo cual se aprecia con los trabajos previos que forman parte del siguiente discurso.

Iniciando con la investigación de Aroapaza (2016), y bajo el cuestionamiento de ¿Cuál sería la naturaleza jurídica para la extinción de dominio que se adecúe a las condiciones teóricas que supone la intervención del Estado? se puede reconocer la necesidad del establecimiento de un concepto jurídico adecuado para lo que

representa la extinción de dominio; vale la aclaración en este punto de que el nombre del proceso en cuestión, para cuando se desarrolló la investigación bajo crítica, era el de pérdida de dominio. Esta percepción no ha variado en esencia puesto que los presupuestos con la actual figura de extinción de dominio los mantiene, siendo además del cambio de nominación, referida a la propiedad, el refuerzo de la condición de autonomía del proceso penal.

Es precisamente lo último que se cuestiona, debido a que, según este primer trabajo previo incorporado como antecedente de la investigación, la naturaleza jurídica de esta figura tiene un vínculo muy cercano con el proceso penal, generando la necesidad dependiente de su contexto punitivo. Esta explicación se fundamenta en el hecho de que hacen falta justificaciones de corte jurídico para que el Estado pueda atribuirse la potestad de extinguir el dominio respecto a las propiedades, que se vinculan con la comisión de delitos en un grupo organizado.

Ahora bien, en lo que respecta a la investigación de Neyra (2017), que aún se refiere a la condición especial que se diseñó en el anterior concepto de pérdida respecto al dominio de los bienes, que la incoación que se produce respecto a este tipo de proceso especial tiene su origen en la existencia de prueba indiciaria establecida en el proceso que se ocupa de revisar el nivel de responsabilidad sobre el ilícito en el ámbito penal. Esta peculiaridad se presenta como un elemento de vinculación directa con el proceso de investigación penal, lo cual escapa a la percepción de un proceso autónomo.

Pese a ello hace la aclaración de que esta existencia previa o mejor dicho el indicio, resulta ser el detonante del proceso de pérdida de dominio, que una vez iniciado pese a que la investigación penal no siguiera su curso por cualquier circunstancia de índole procedimental. Esta condición si deja en claro una circunstancia de autonomía en función a que el desarrollo del proceso de pérdida de dominio continúa su curso, en tanto que solo le bastará haber reconocido el origen ilícito, aunque no se determine la responsabilidad penal.

Cabe resaltar que esta apreciación de los investigadores se enfoca en una nominación anterior al proceso de extinción de dominio, puesto que el cambio no constituyó modificaciones sustanciales en la estructura anterior que lo diferencie notablemente de la actual, así la calificación de circunstancias poco claras corresponderá revisarlas con cautela.

Para la correcta comprensión debe dejarse en claro el concepto de extinción de dominio en tanto que se trata de la nominación actual del proceso que se ocupa de la anulación del derecho de propiedad en razón del reconocimiento de orígenes ilícitos; cabe entonces cuestionarse ¿cuál es la correcta concepción de la extinción de dominio?

Se entiende que lo primero que puede conceptualizar a la extinción de dominio es la condición que otorga el efecto jurídico, así pues, las características relacionadas con el origen ilícito que ha promovido la existencia del bien, es aquella justificante la que permite al Estado en función a los intereses públicos gestionar el traslado para su administración estatal, de los derechos de propiedad de un

determinado sujeto en tanto se verifique la condición de ilicitud que vinculada al origen sirva de argumento para tal intervención.

Es en función a esta intervención sobre el concepto de la propiedad como derecho que corresponde interrogar, ¿qué límites existen en referencia a la propiedad en su carácter de derecho fundamental?, sobre ello es preciso indicar primer que la propiedad como tal se constituye en función a la capacidad de dominio que cualquier sujeto puede ejercer sobre determinado patrimonio, esto es lo que permite reconocer la pertenencia.

Desde luego interesa también dejar en claro el sentido social que convoca la participación de la propiedad como derecho en el vínculo existente entre los miembros de una sociedad, es importante considerar su fortaleza como medio de consolidación de la economía de los pueblos basado sin duda en el primer momento respecto a la atención del interés individual.

Según lo señalado se puede apreciar el sentido de poder que convoca este derecho en función a las utilidades que plantea como sus efectos, de acuerdo a ello la consolidación del derecho a la propiedad debe estar regida por principios básicos entre los que se encuentra el de legalidad que concierte a las características de licitud respecto a su origen y las consecuencias que vincula su ejercicio en sociedad.

En función a ello es que se puede indicar que para esta tesis interesa en primer lugar la condición de licitud, puesto que su origen deberá tener esta característica para que se puedan consolidar los demás derechos o el propio dominio sobre la cosa

que representa la propiedad en virtud de su poderío. Vale decir que deberá ceñirse a las pautas legales que implica la pertenencia al contexto privado del derecho sin desligarse de los intereses que convoca el Derecho Público.

Como se puede apreciar se entiende que lo contrario a ello se constituye en el ámbito de lo ilícito, por lo mismo que representa una condición de riesgo sobre el dominio, es decir que plantea posibilidades de intervención de parte del Estado, en primer lugar tratándose de los intereses privados lo hará a través del sistema de justicia en tanto exista el reclamo de un tercero afectado para que se le otorgue el derecho sobre el mismo bien que ostenta en su lugar otro sujeto bajo condiciones de ilicitud.

De otra parte, en tanto los intereses lesionados correspondan al ámbito público como es el caso de la ilicitud del origen vinculado con las condiciones que lo envuelven en el panorama de una acción delictiva, podrá el Estado intervenir a través del sistema de justicia para lograr la corrección de esta condición mediante el traslado de dicho dominio para que sea administrado por la estructura estatal a fin de reorientar el sentido social de los bienes que ostentan propiedad privada para ser trasladados a la propiedad pública.

Tal cual se indica, el contexto de protección del dominio sobre los bienes que constituyen la propiedad en tanto derecho fundamental no tiene un carácter absoluto, como sucede con todos los derechos aun cuando hayan adquirido el carácter fundamental. En virtud a ello se encuentra justificada dicha intervención para el traslado del dominio del bien hacia la protección del interés público, puesto que no

ha sido explotado dicho bien de acuerdo a la condición intrínseca de su propia naturaleza, constituyendo el carácter ilícito de dicha explotación la sola vinculación del propietario con el carácter ilícito de la acción delictual con la que se vincula.

Según lo que se ha explicado se considera prudente buscar ¿cuál es el sentido de la extinción de dominio como acción del Estado?, es importante señalar que se ha consolidado este tipo de proceso especial y con carácter autónomo en el espacio jurídico de los procesos para que el Estado conlleve acciones que le permitan trasladar el dominio del bien desde una esfera particular a otra que representa el interés público como justificación del dominio.

Esta inclinación de control que asume el Estado tiene su origen en la acción de lucha contra la incidencia del crimen organizado en el país, lo cual se aprecia cada día más creciente, esto con la intención de lograr hacer de alguna manera cada vez más débil el concepto de poder económico que ostentan estos grupos criminales, por lo que se encuentra justificada la intervención del Estado a fin de lograra la reutilización de estos bienes en funciones y efectos sociales, que finalmente ese debería ser el sentido óptimo de la propiedad como concepto.

Para tales efectos es que se crea este proceso de extinción de dominio con facultades puntuales que permiten consolidar el traslado del dominio antes ya explicado a fin de solventar la acción debilitadora de la criminalidad en el aspecto económico, además de esperar un resultado óptimo de la existencia de los bienes hacia un sentido social de aprovechamiento efectivo en pos del crecimiento del grupo social.

Desde luego se pueden realizar muchas posiciones de visión sobre el tema de la eficacia de este proceso así pues se cuestiona ¿Qué tan buena puede ser la condición de eficacia del proceso de extinción de dominio?, esto se proyecta en función de los efectos que produce el resultado final de los procesos de esta naturaleza, vale decir si resulta efectiva realmente la acción de traslado del bien hacia la esfera de dominio del Estado, y si en tal nivel, resulta apropiado el tratamiento que reciben dichos efectos patrimoniales.

Es propicio señalar que las condiciones del dominio estatal sobre los bienes ya se encuentran en un panorama de visión poco favorable respecto a la administración de recursos patrimoniales, esto es que no resulta lo suficientemente eficaz su acción si se observan los resultados de dichos actos. Es por ello importante conceder un poco de atención a este tipo de procesos en los que se pretende desarrollar acciones que conlleven a un resultado social neto sobre el ejercicio del poder sobre el bien patrimonial que se extingue del dominio privado.

La principal crítica que se puede realizar respecto a este tipo de proceso, esta en función a la condición autónoma que se puede concebir incluso bajo el criterio de independencia, ello en tanto que los conceptos son distintos, puesto que la fase en la que se presentan medidas cautelares para asegurar el resultado de traslado de dominio sobre el bien, constituye una acción previa destinada a las funciones de control, esta claro, pero no debiera dejarse de lado la condición legal que implica la comunicación de tales actos a fin de la interposición de otros criterios de parte del afectado.

Esto último se consolida como la manifestación contraria al derecho de oposición que independientemente de las condiciones ilícitas del origen del bien, ha de ser otorgada como opción al afectado, esto es al propietario del bien cuyo dominio se pretende extinguir, esto se convierte en una manifestación que puede ser calificada hasta como arbitraria, dado que incluso en el ámbito penal el traslado que comunica las acciones del Estado a través de sus representantes, constituye una obligación en el proceso, lo que da la opción a ejecutar directamente el derecho a la defensa.

Tal vez, lo que se plantea como una condición de ausente información al afectado en su patrimonio se confunda con la restricción informativa que convoca el sentido de reserva de la información que se traslada del ámbito penal, pero cabe recordar que solo aplica para terceros no involucrados y únicamente en la fase de diligencias previas par consolidar la información que permita constituir acciones puntuales en el proceso, esto es que los actos procesales que se estimen accionar deberán ser comunicados de manera eficiente.

En tal sentido el enfoque crítico se posa en las condiciones que se presenta en este proceso sobre su carácter autónomo que no permite vincularlo con otros procesos o áreas de verificación lo cual cierra las puertas a cuestiones previas u otras figuras que permitirían un mejor cuidado respecto a las garantías que se supone debe contemplar cualquier tipo de proceso en el ámbito de intervención del Estado, sea penal, civil, especial u otros. Es por ello importante dejar en claro que la condición de control debe asumirse respetando los límites no solo del derecho de propiedad que existen en el ordenamiento constitucional, sino también las condiciones principistas

del mismo que mediante la intervención de los principios adecuadamente administrados permitan un proceso justo y con más eficacia.

TOMA DE POSTURA

Debido al cambio de nominación de pérdida de dominio a extinción de dominio reforzó la condición de autonomía del proceso penal. Solo basta haber reconocido el origen ilícito (indicio) para que el desarrollo del proceso de pérdida de dominio continúe su curso. La sola vinculación del propietario con el carácter ilícito justifica la intervención para el traslado de dominio del bien hacia la protección del interés público. Se justifica esta figura jurídica en base a la creciente incidencia del crimen organizado en el país, esta acción estatal permite que cada vez sea más débil el concepto de poder económico que ostentan estos grupos criminales.

5.1.2. Discusión sobre el objetivo específico: Reconocer la participación de los principios generales del derecho en la ejecución del proceso de extinción de dominio

Tal cual se ha explicado en los párrafos anteriores respecto a la intervención del Estado sobre la propiedad para que sea trasladado el dominio desde una esfera privada hacia otra de connotación pública, requiere de la acción correcta de dicho control mediante la ejecución de un proceso viable y con el respeto irrestricto de las directrices que se plantean en el eje del ordenamiento que es la constitución peruana. En tal sentido la observación surge desde una perspectiva teórica que implica el respeto de los principios, por lo cual conviene preguntar ¿cuál es la función de los principios en el ámbito jurídico?

Sobre ello, interesa traer a colación el sentido de la existencia del ordenamiento constitucional que ampara la estructura jurídica mediante las garantías que incorpora basada en principios, pues bien, la función que cumplen estos últimos es la de consolidar un panorama de ejecución correcta en la aplicación de las reglas que incorpora el derecho y se derivan del ordenamiento constitucional.

Esta labor se basa en el sentido de protección que orienta la optimización del derecho, esto es que para la aplicación de las reglas constitucionales se requiere de la ejecución previa de un desarrollo legislativo, esto es que las leyes especiales que se derivan la constitución cumplan con el sentido optimizador de los principios. Esta acción tiene por finalidad lograr un esquema equitativo en la distribución de los derechos sobre todo atendiendo a que ningún derecho resulta de carácter absoluto, esto es se presenta como una condición de equilibrio.

Como se puede apreciar la función de estos principios tienen un encargo de equilibrio para que se proyecte sobre la correcta administración del poder que implica el sistema de justicia, validando el sentido de protección sobre los derechos que se cuestionan o reclaman en el ámbito de aplicación del ordenamiento constitucional. Para una mayor comprensión resulta necesario interrogar ¿cuál es el alcance de los principios generales sobre la creación y ejecución de los procesos judiciales?

De acuerdo a lo hasta ahora señalado sobre los principios, deberá dejarse en claro que los principios generales dada su connotación amplia, tienen por finalidad establecer el soporte de las estructuras del esquema jurídico, pilares que conllevan a la condición de garantías del sistema de justicia enfocado en la resolución adecuada

de los conflictos. Así para el caso estudiado compete la intervención de estos principios el control de los derechos que corresponden a las partes que intervienen en el proceso, sin duda el interés social esta representado por el propio Estado, pero cabe hacer hincapié en el efecto que tiene sobre los intereses particulares que pudieran estarse afectando, debido a una ausencia de contemplación de tales principios.

Entonces el efecto de estos principios generales se consolida no solo sobre el derecho que debe protegerse de las partes, sino también orientan el sentido de la construcción del esquema que representa o guía la intervención del Estado sobre el control de intereses, vale decir la forma en que se construyen los esquemas procesales. De acuerdo a ello debe revisarse el carácter optimizador que contemplan tales principios generales como es el caso de la legalidad y el debido proceso para que se observe la estructura del proceso de extinción de dominio a fin de reconocer si cumple con la condición de garante de los derechos de las partes y el sentido legal que pueda estar siendo vulnerado por el carácter autónomo que se le ha atribuido.

Este nivel de observación resulta de suyo importante, en tanto que la vinculación del esquema con los principios otorga no solo seguridad jurídica sino también confianza de la sociedad en el esquema de justicia, además que proyectaría un adecuado control de los intereses tanto en el ámbito público como el privado. Por tanto, es importante que los esquemas se consoliden como una fuente de eficacia del sistema en tanto tutela de derechos que debe darse de manera efectiva.

TOMA DE POSTURA

De acuerdo a la revisión de la forma en que participan los principios generales del derecho en la ejecución del proceso de extinción de dominio, es necesario tener en cuenta que las leyes especiales se derivan de la Constitución, por lo que deben cumplir con el sentido optimizador de los principios. Debe revisarse el carácter optimizador del principio de legalidad y debido proceso para que se observe la estructura del proceso de extinción de dominio, en tanto que la certeza sobre la ilicitud respecto al origen del bien requiere de un reconocimiento firme.

5.1.3. Discusión sobre el objetivo específico: Proponer la adecuación de la Ley del proceso de extinción de dominio para establecer un control adecuado en base a los principios generales del derecho

De acuerdo a las determinaciones previas a esta discusión, asumidas en razón de los objetivos específicos teóricos y de análisis de la realidad, es posible indicar que se esta al nivel de establecer una propuesta de solución al problema advertido respecto a la inadecuada construcción de la ley de extinción e dominio respecto a os principios del derecho. Tal es así, que interesa saber ¿cuál es el alcance del carácter autónomo del proceso de extinción de dominio sobre el reconocimiento de la ilicitud del origen del bien?

Conforme se ha dicho ya anteriormente, esta condición de autonomía del proceso de extinción de dominio ya ha tenido bastantes comentarios críticos tanto en la doctrina como en litigantes de manera general; la principal de ellas se centra en la parte doctrinaria en la que se verifica un alcance de acción de este proceso que sobrepasa el límite de un derecho como lo es la propiedad. Es lógico que en tanto exista el carácter de intervención en función a la necesidad, esta última debe ser superior al propio derecho que se pretende restringir.

Sin duda alguna la seguridad ciudadana dependerá de muchos factores que en gran parte dependen de la intervención estatal para alcanzar eficacia, tal cual es la acción del Estado con el fin de garantizar la seguridad ciudadana. Ate ello es que se ha cread la existencia de políticas públicas destinadas a combatir la criminalidad que existe en la sociedad, de modo tal que estas tienen una consecuencia en la estructura del derecho interno modificando ciertos aspectos de la estructura normativa o creando figuras.

Para el caso de la extinción de dominio se ha de tener en cuenta que se ha creado una estructura de acción que pretende controlar el avance de la acción criminal para limitar sus posibilidades económicas y como consecuencia de ello debilitar su poder delincuencial. Esta gestión se debería enfocar en función a los intereses sociales tal cual se aprecia, pero sin dejar de lado la estructura jerárquica que establece el propio ordenamiento jurídico mediante la raíz constitucional que se inspira en principios.

Es en función a ello que se advierte la existencia de diferentes pautas jurídicas que conllevan a cuestionar ¿Qué limites normativos e interpretativos garantizan el correcto control de los principios generales del proceso?, como ya se ha indicado, existen lineamientos basados en el orden constitucional, se precisa por ello que el desarrollo legislativo los siga con el fin de establecer reglas acordes con las garantías que se ofrecen constitucionalmente. En virtud de ello se advierte la necesidad de que en la estructura normativa de cada regla existan límites, lo cual se constituye como

un límite normativo, así los efectos que tendrá dicha estructura legislativa se condice y adecua al sistema.

Esta indicación es lo que se refiere a la adecuada sistematización de las leyes, se entiende deben aplicarse y ejecutarse en orden a la armonía con el resto del ordenamiento jurídico, principalmente con la que corresponde a la normativa constitucional. Esta indicación implica que dicho control no solo requiera de la existencia de los principios en el ordenamiento jurídico, que como tal los hay, sino que se precisa también de la existencia de un acto interpretativo de parte de quien los ha de aplicar, así pues, las inferencias lógicas que conlleven a la ejecución de las reglas deberán tener factores tanto objetivo que parten de la norma, cuanto subjetivos que funcionan en razón de las máximas de la experiencia de los magistrados.

En el afán de reconocer los factores que debieran ser atendidos a fin de solucionar el problema advertido por esta investigación se cuestiona ¿Qué vínculo se establece entre la discusión de ilicitud del presunto acto criminal y el fundamento de origen ilícito que promueve la extinción de dominio?, de acuerdo a la verificación de los casos por extinción de dominio, se aprecia que el origen de este tipo de procesos depende de la condición de ilicitud presunta en una investigación penal, esto es que con la noticia criminal se da inicio al trámite de extinción. Esta condición relacionada únicamente con el carácter presunto de la ilicitud obviamente aun no ha sido discutido ni determinado, pero se convierte en el fundamento que origina el proceso de extinción de dominio.

TOMA DE POSTURA

Habiéndose planteado como meta de la investigación proponer la adecuación de la Ley del proceso de extinción de dominio para establecer un control adecuado en base a los principios generales del derecho, se ha llegado a reconocer dos elementos de vulneración que son el derecho a la propiedad como garantía y el debido proceso debido a que contiene un requerimiento preciso de la licitud de las acciones interventoras del Estado, lo cual no se verifica en razón de que el fundamento que da origen al proceso de extinción de dominio es solo una presunción; luego de lo cual en razón del carácter autónomo se desliga de la vía penal, donde se habrá de verificar la verosimilitud del carácter ilícito, lo cual no se produce de manera consecuente en la extinción de dominio como proceso.

5.2. La validación de las variables

Para el desarrollo de la validación de las variables se ha realizado el análisis sintético de los resultados que se obtuvieron de la discusión, ello en tanto que se realizó de acuerdo a las metas trazadas en la investigación, las cuales han tenido su origen en las variables tanto independiente como dependiente, lo cual se sintetiza a fin de establecer una afirmación que muestre su validez.

5.2.1. Validación sobre la variable independiente: La autonomía del proceso de extinción de dominio

Teniendo en cuenta que este primer componente de la hipótesis inicial ha tenido como función delimitar el origen del problema, es correcto señalar que este se advierte de la condición autónoma que se ha otorgado al proceso de extinción de dominio, condición que sin duda alguna representa un apartamiento del proceso penal que se origina en función de la misma noticia criminal. Este elemento o punto de

partida se muestra al inicio para ambos procesos, tanto penal como de extinción de dominio, como una mera presunción, que atendiendo al principio de presunción de inocencia no adquiere el nivel de atribución de responsabilidad antes de la existencia de un acto resolutivo firme como lo es una sentencia consentida.

Esta contemplación se ha realizado en tanto que el cambio de nominación de pérdida de dominio a extinción de dominio reforzó la condición de autonomía del proceso penal. Solo basta haber reconocido el origen ilícito (indicio) para que el desarrollo del proceso de pérdida de dominio continúe su curso. La sola vinculación del propietario con el carácter ilícito justifica la intervención para el traslado de dominio del bien hacia la protección del interés público. Se justifica esta figura jurídica en base a la creciente incidencia del crimen organizado en el país, esta acción estatal permite que cada vez sea más débil el concepto de poder económico que ostentan estos grupos criminales. Es en virtud de todo ello que la variable en estudio se valida a través de la siguiente indicación:

La autonomía del proceso de extinción de dominio desliga al proceso de la condición de ilicitud que se ventila en el proceso penal.

5.2.2. Validación sobre la variable dependiente: Los principios generales del derecho

Sobre este elemento que se incorpora como variable dependiente se debe indicar que tiene por función mostrar el contenido de la consecuencia o lo que se puede llamar también el efecto de lo que en este caso se ha señalado como la autonomía del proceso de extinción de dominio. De acuerdo a ello, se tendrá que verificar si el aporte de los principios generales del derecho es el más idóneo para

ejercer el control de la actividad procesal y científicamente jurídica, en el desarrollo de las acciones destinadas a limitar el ejercicio de un derecho constitucional que se constituye con carácter fundamental, no solo en virtud de su posición normativa, sino también porque constituye un pilar de la economía.

Según lo planteado, la participación de los principios generales del derecho en la ejecución del proceso de extinción de dominio debe cumplir con el sentido optimizador de los principios. Debe revisarse el carácter optimizador del principio de legalidad y debido proceso para que se observe la estructura del proceso de extinción de dominio, en tanto que la certeza sobre la ilicitud respecto al origen del bien requiere de un reconocimiento firme.

De acuerdo a ello se reconocen dos elementos de vulneración que son el derecho a la propiedad como garantía y el debido proceso debido a que contiene un requerimiento preciso de la licitud de las acciones interventoras del Estado, lo cual no se verifica en razón de que el fundamento que da origen al proceso de extinción de dominio es solo una presunción; luego de lo cual en razón del carácter autónomo se desliga de la vía penal, donde se habrá de verificar la verosimilitud del carácter ilícito, lo cual no se produce de manera consecuente en la extinción de dominio como proceso. Según ello el planteamiento de la variable con carácter independiente alcanza la siguiente validación:

Los principios generales del derecho y en especial el debido proceso, así como el derecho de propiedad son alterados, por lo que debe establecerse la conexión entre la determinación de ilicitud del origen de los bienes sometidos a extinción de dominio a fin de garantizar el respeto del derecho de propiedad.

5.3. La contrastación de la hipótesis

Determinación final de la tesis:

Luego de haber establecido las posturas de la investigación y haber sintetizado las mismas en función al orden de las variables, se ha logrado establecer una determinación final, que tal cual la hipótesis inicial se originó por la unión de las variables, como determinación final se ha procedido a la vinculación de los resultados de la validación de estas variables, lo que se muestra a continuación:

La autonomía del proceso de extinción de dominio desliga al proceso de la condición de ilicitud que se ventila en el proceso penal, por lo que los principios generales del derecho y en especial el debido proceso, así como el derecho de propiedad son alterados, por lo que debe establecerse la conexión entre la determinación de ilicitud del origen de los bienes sometidos a extinción de dominio a fin de garantizar el respeto del derecho de propiedad.

Conclusiones:

Conclusión general:

Se logra determinar que la autonomía del proceso de extinción de dominio desliga al proceso de la condición de ilicitud que se ventila en el proceso penal, por lo que los principios generales del derecho y en especial el debido proceso, así como el derecho de propiedad son alterados, por lo que debe establecerse la conexión entre la determinación de ilicitud del origen de los bienes sometidos a extinción de dominio a fin de garantizar el respeto del derecho de propiedad.

Conclusiones específicas:

Primera:

Se llega a concluir respecto al fundamento jurídico justificante de la autonomía del proceso de extinción de dominio; que debido al cambio de nominación de pérdida de dominio a extinción de dominio reforzó la condición de autonomía del proceso penal. Solo basta haber reconocido el origen ilícito (indicio) para que el desarrollo del proceso de pérdida de dominio continúe su curso. La sola vinculación del propietario con el carácter ilícito justifica la intervención para el traslado de dominio del bien hacia la protección del interés público. Se justifica esta figura jurídica en base a la creciente incidencia del crimen organizado en el país, esta acción estatal permite que cada vez sea más débil el concepto de poder económico que ostentan estos grupos criminales.

Segunda:

Se concluye de acuerdo a la revisión de la forma en que participan los principios generales del derecho en la ejecución del proceso de extinción de dominio,

que teniendo en cuenta que las leyes especiales se derivan de la Constitución, por lo que deben cumplir con el sentido optimizador de los principios. Debe revisarse el carácter optimizador del principio de legalidad y debido proceso para que se observe la estructura del proceso de extinción de dominio, en tanto que la certeza sobre la ilicitud respecto al origen del bien requiere de un reconocimiento firme.

Tercera:

Habiéndose planteado como meta de la investigación proponer la adecuación de la Ley del proceso de extinción de dominio para establecer un control adecuado en base a los principios generales del derecho, se ha llegado a reconocer dos elementos de vulneración que son el derecho a la propiedad como garantía y el debido proceso debido a que contiene un requerimiento preciso de la licitud de las acciones interventoras del Estado, lo cual no se verifica en razón de que el fundamento que da origen al proceso de extinción de dominio es solo una presunción; luego de lo cual en razón del carácter autónomo se desliga de la vía penal, donde se habrá de verificar la verosimilitud del carácter ilícito, lo cual no se produce de manera consecuente en la extinción de dominio como proceso.

Recomendaciones

Primera:

Se recomienda al Ministerio de Justicia y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial la evaluación de los factores advertidos en esta investigación a fin de que se proponga al legislador, las modificaciones respectivas que permitan condicionar el carácter autónomo de la extinción de domino a cuestiones meramente procesales, como corresponde, y que se genere con ello alinearlos con los principios generales del derecho como el debido proceso que integra muchos otros, así como el respeto del derecho de propiedad.

Segunda:

Se sugiere la modificación de la estructura legislativa del proceso de extinción de dominio, a fin de que si bien es cierto se pueda conservar el origen del mismo a través de la noticia criminal, que también da inicio al proceso penal, ello produzca únicamente una condición cautelar, que prevenga acciones sobre los bienes entre tanto se produzca en el proceso penal la atribución de responsabilidad de los agentes propietarios de dicho patrimonio.

Bibliografía

- Albaladejo, M. (1977). *Derecho Civil III. Derecho de Bienes* (Tercera ed., Vol. I). Barcelona, España: Bosch.
- Alcalde Rodríguez, E. (2008). Relación entre valores y principios generales de derecho en la interpretación constitucional de los derechos fundamentales en Chile. *Revista Chilena de Derecho*, XXXV(3), 463 - 484.
- Aroapaza Balcona, W. (2016). *Naturaleza Jurídica de la Pérdida de Dominio en el Perú*. Puno: Universidad Nacional del Altiplano. Obtenido de <http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/6595/EPG951-00951-01.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Barriga Albis, J. (2019). *Los Principios en el Derecho*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Caro Coria, D. (2006). *Las garantías constitucionales del proceso penal*. México: Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones de la UNAM.
- Coca Guzmán, S. (09 de Diciembre de 2020). *Principios generales del derecho. Obligación de suplir defectos o deficiencias de la ley (artículo VIII del TP del CC)*. Obtenido de <https://lpderecho.pe/principios-generales-derecho-suplir-defectos-deficiencias-ley-titulo-preliminar-codigo-civil/>
- De Ruggiero, R. (1944). *Instituciones de Derecho Civil* (Cuarta ed.). (R. Suñer, & J. Santa - Cruz Tejeiro, Trads.) Madrid, España.
- Díaz Couselo, J. (1971). *Los Principios Generales del Derecho*. Buenos Aires: Plus Ultra.

- Guzmán Napurí, C. (2009). Los principios generales del Derecho Administrativo. *IUS ET VERITAS*, 228-249.
- Lico, M. (2018). *Breve estudio de los principios generales del Derecho y de los principios generales del Derecho aplicables y surgidos del Derecho Administrativo*. Buenos Aires: Procuración General.
- Lorca Navarrete, A. (2003). El derecho procesal como sistema de garantías. *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*(107), 531-557.
- Luján Túpez, M., & Flores Aguilar, D. (20 de Marzo de 2019). Obtenido de Subsistema Nacional de Extinción de Dominio: <https://extinciondedominio.org/web/>
- Moreno, J. (24 de Agosto de 2020). *La extinción de dominio*. Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=yMqXNKEwC_g
- Muñoz Ramírez, M., & Vargas Mora, R. I. (2017). *La extinción de dominio y la afectación de derechos: análisis comparativo*. San José de Costa Rica: Universidad de Costa Rica. Obtenido de <http://ijj.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2017/09/Melissa-Mu%C3%B1oz-Ram%C3%ADrez-y-Rafael-Isaac-Vargas-Mora.-Tesis-Completa..pdf>
- Neyra Solís, J. (2017). *El Delito de Lavado de Activos y el Proceso de Pérdida de Dominio en la Legislación Penal Peruana*. Lima: Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Obtenido de http://repositorio.uigv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.11818/2378/T_Doctorado%20en%20Derecho_NEYRA_SOLIS_JORGE%20CARLOS.pdf?sequence=2&isAllowed=y
- Obregón Sevillano, T. (2011). La interpretación e integración de la norma tributaria. *Advocatus*, 361-375.

- Ripert, G., & Planiol, M. (2000). *Derecho Civil I* (Vol. VIII). (L. Pereznieta Castro, Trad.) México: Oxford.
- Salazar Landínez, S. (2019). *Extinción de dominio*. Lima: Poder Judicial.
- Salcedo Chambergó, P., & Candela Morales, D. (2011). *Modelo de Evaluación de los Principios de Responsabilidad Social Estatal: Propuesta para el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal COFOPRI – 2009*. Lima: Repositorio de la Universidad Nacional de Ingeniería.
- Valverde y Valverde, C. (1936). *Tratado de Derecho Civil Español* (Vol. II). Valladolid, España: Cuesta.
- Villagrán, M. (2003). *La Expropiación de los Derechos*. Repositorio de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Anexos

1. Formulario de encuesta aplicada para la validación de expertos

Tesis: La autonomía del proceso de extinción de dominio frente al control de los principios generales del derecho

I. Variable independiente: La autonomía del proceso de extinción de dominio

1. El proceso de extinción de dominio se ocupa de limitar o extinguir la propiedad bajo la potestad del Estado referida al control de la legalidad en las transacciones relacionadas con el crimen organizado.
 - a. De acuerdo
 - b. En desacuerdo
 - c. No opinan
2. El carácter autónomo del proceso de extinción de dominio tiene una repercusión sobre la manera en que se ejecuta, toda vez que, limita la comunicación con el proceso penal que le dio origen restringiendo la posibilidad e información de aporte valioso para el reconocimiento de los bienes ilícitos.

3. La efectividad de la lucha contra el crimen organizado dependerá en buena porción de los resultados que se tengan sobre la ejecución del proceso de extinción de dominio, para lo cual se requiere del trabajo conjunto con el proceso penal que le dio origen.

II. Variable dependiente: Los principios generales del derecho

4. Los principios generales del derecho son reglas de optimización para interpretar las normas frente a dudas o distorsión de la realidad en el ejercicio de los derechos y potestades.
5. Para el proceso de extinción de dominio se han omitido en su configuración el efecto de los principios generales del derecho que se proyectan a la garantía del derecho a la propiedad y la limitación del derecho de restricción que le corresponde al Estado.
6. Para lograr la adecuada aplicación de la autonomía del proceso de extinción de dominio deberá controlarse su ejecución en base a los principios generales del derecho con especial atención en el debido proceso y los límites a las potestades del Estado.

Link de la encuesta:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX-s5O6qWvbW302->

[E99M8J7BcGPWdK1lSka8EseQxPzGV_FA/viewform?usp=sf_link](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX-s5O6qWvbW302-E99M8J7BcGPWdK1lSka8EseQxPzGV_FA/viewform?usp=sf_link)



Maria Isabel Saenz Alvarado <sami96isa.misa@gmail.com>

Remito expedientes digitalizados

1 mensaje

Ricardo Daniel Cornejo Hurtado <rcornejoh@pj.gob.pe>
Para: "sami96isa.MISA@gmail.com" <sami96isa.MISA@gmail.com>

5 de diciembre de 2022, 16:09

Por medio del presente tengo el agrado de saludarla, asimismo de remitir los expedientes digitalizados, cabe precisar que los expedientes están digitalizados por partes, pero se ha enumerado de manera correlativa para mejor entender.

Saludos cordiales

--



Ricardo Daniel Cornejo Hurtado
Juzgado Transitorio Especializado en Extinción de Dominio
Corte Superior de Justicia de Lambayeque
Celular N° 955322112
Reg. ICAL N° 9576

60-2022-2.pdf

53-2020-2.pdf

2-2022-2.pdf

2-2022.pdf

2-2022-1.pdf

60-2022.pdf

60-2022-1.pdf

53-2020.pdf

53-2020-1.pdf

6-2021.pdf

45-2021.pdf

45-2021-1.pdf

45-2021-2.pdf

2 adjuntos **6-2021-1.pdf**
17828K **6-2021-2.pdf**
6407K